SERIE DE DOCUMENTOS
DE POLÍTICA PÚBLICA

UNDRR
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

PNUD

N°. 57

PNUD LAC PDS

Desarrollo humano resiliente para superar el ciclo de desigualdad-desastre-desigualdad

www.undp.org/latin-america

Este documento fue elaborado por Rodrigo Barraza, Especialista Técnico en ODS del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Luis Bonilla, Oficial de Asuntos Económicos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR); y Saskia Cambien Llopis, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

Aviso Legal:

Desarrollo humano resiliente para superar el ciclo de desigualdad-desastre-desigualdad

Las opiniones expresadas en la presente publicación son las de los autores y no representan necesariamente las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), de los organismos donantes o los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

En este documento, se utiliza en ocasiones el masculino genérico para referir tanto a hombres como a mujeres, a fin de aligerar el texto.

El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno en unos 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.

Copyright © PNUD 2025 Todos los derechos reservados.
Producido en EE.UU. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | One United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017, Estados Unidos.
Los puntos de vista y contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura oficial del PNUD.

Tabla de contenido

Mensajes principales	4
Introducción	5
1. Una región bajo presión: aumento de los desastres climáticos y sus costos acumulados	6
El costo creciente de los desastres en la región	8
Desbalance en la inversión en reducción del riesgo de desastres	11
Sesgos en el financiamiento de la resiliencia	12
2. Riesgo de desastres y desigualdad	14
3. Configuración desigual del riesgo de desastres	16
Exposición desigual	17
Vulnerabilidad desigual	21
Brecha de resiliencia	24
4. Recomendaciones de política pública	30
Instrumentos	30
Instituciones	31
Infraestructura	31
Romper el ciclo entre desigualdad y desastre	32

Mensajes principales

1. La desigualdad y los desastres son dos factores que se retroalimentan mutuamente y estancan el desarrollo humano de la región. La desigualdad multiplica los impactos de los desastres y, a su vez, los desastres profundizan las desigualdades existentes. Esto se debe a que el riesgo de desastre es endógeno a los procesos de desarrollo existentes y su distribución está condicionada por factores políticos, sociales y económicos que, muchas veces, se relacionan con la distribución de recursos.

2. La relación entre desastre y desigualdad se manifiesta en tres dimensiones críticas que interactúan para formar el ciclo de desigualdad-desastre-desigualdad. En primer lugar, existe una exposición desigual al riesgo de desastre, impulsada principalmente por procesos de urbanización no planificados que empujan a los más pobres hacia zonas de peligro. En segundo lugar, hay una vulnerabilidad desigual, donde la población con menos recursos pierde una mayor proporción de sus recursos y patrimonio. En tercer lugar, existe una brecha de resiliencia entre los estratos socioeconómicos. Es decir, una capacidad de recuperación tras el desastre desigual, donde los hogares con más activos financieros se recuperan más rápido, mientras que los hogares más pobres enfrentan procesos lentos que pueden dañar permanentemente su bienestar.

3. El reporte propone una serie de recomendaciones para transitar hacia una gestión del riesgo integrada en los procesos de desarrollo. Estas recomendaciones se estructuran a partir del esquema de tres “I” para el desarrollo humano resiliente –instrumentos, instituciones e infraestructura– (PNUD, 2025) y se distribuyen entre iniciativas e inversiones para la gestión prospectiva, correctiva y compensatoria del riesgo de desastres (UNDRR, 2024).

Introducción

La región de América Latina y el Caribe (ALC) atraviesa un momento crítico en su trayectoria de desarrollo. En un contexto marcado por eventos más intensos y erráticos, relacionados con el incremento de la vulnerabilidad y con el cambio climático, la región enfrenta presiones cada vez mayores sobre sus capacidades productivas, fiscales y sociales. Los desastres no ocurren en el vacío, sino que se superponen a estructuras persistentes de desigualdad que caracterizan a la región, configurando un escenario en el que los riesgos aumentan y, a la vez, se distribuyen de manera desigual.

En este contexto, el riesgo de desastres y la desigualdad no son fenómenos independientes. Por el contrario, forman parte de un sistema interdependiente producido por decisiones económicas, políticas e institucionales, en el que las condiciones socioeconómicas preexistentes determinan quién está expuesto, quién es más vulnerable y quién tiene una mejor capacidad para recuperarse. Los impactos de los desastres tienden a reforzar estas desigualdades, generando un ciclo de retroalimentación que limita el desarrollo humano y profundiza las brechas existentes, configurando verdaderas trampas de pobreza.

Este proceso está lejos de ser marginal. La recurrencia de eventos, sus impactos acumulativos y los costos asociados –muchas veces subestimados en las métricas tradicionales– están erosionando progresivamente el bienestar de las personas y el espacio fiscal de los Estados. Al mismo tiempo, la persistencia de enfoques reactivos en la gestión del riesgo, junto con sesgos en la asignación de recursos predominantemente destinados a la gestión compensatoria, limita la capacidad de anticipar y reducir estos impactos, reforzando trayectorias de desarrollo insostenibles.

Este documento de política, desarrollado a partir del diálogo entre el *Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025* y el *Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en ALC 2024* (RAR24), publicados por el PNUD y UNDRR, respectivamente, tiene como objetivo analizar las interacciones entre desigualdad y riesgo de desastres en la región, así como sus implicaciones para el desarrollo humano. El primero avanza en la conceptualización del desarrollo humano resiliente como respuesta a un período de creciente incertidumbre y múltiples crisis, mientras que el segundo ofrece un análisis y recomendaciones orientadas a fortalecer mecanismos e instrumentos de financiamiento para inversiones inclusivas y sostenibles en Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), considerando sus dimensiones prospectiva, correctiva y compensatoria.

En este documento resulta útil el concepto de desarrollo humano resiliente, que busca que las personas disfruten de la vida que valoran en términos de capacidades y agencia, de forma que se evite o mitigue el impacto en sus vidas de perturbaciones críticas, y que las personas y las comunidades, especialmente las más desfavorecidas, puedan moldear sus propias vidas y, de ser golpeadas por adversidades, recuperarse con el tiempo y volver a prosperar (PNUD, 2025: 63). Sin embargo, esta aspiración se ve limitada cuando dichas capacidades y oportunidades se distribuyen de manera desigual. Superar este desafío requiere comprender la endogeneidad del riesgo en los procesos de desarrollo para priorizar la equidad y el bienestar humano en la construcción de la resiliencia contra desastres así como, inversamente, priorizar la resiliencia contra desastres en acciones de reducción de la desigualdad.

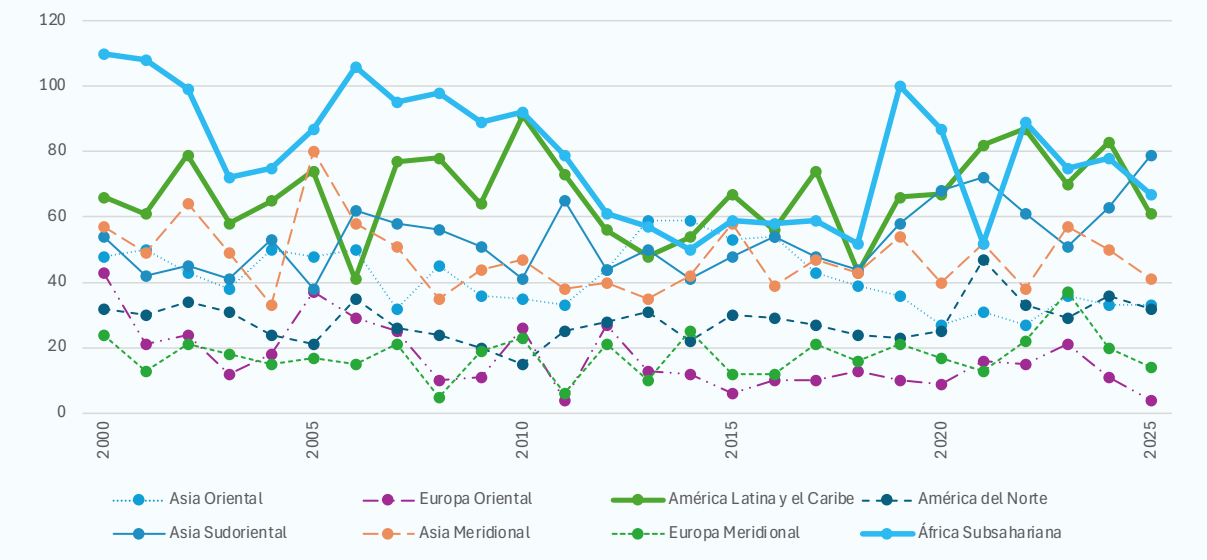
El presente documento toma como punto de partida que los efectos e impactos de los desastres no se distribuyen de manera homogénea. Las poblaciones en situación de pobreza, en territorios altamente expuestos o con menor acceso a servicios básicos y protección social, enfrentan pérdidas más severas y procesos de recuperación más lentos. Asimismo, **la recurrencia y superposición de eventos genera dinámicas de riesgo compuesto, en las que los impactos se encadenan y profundizan amplificando las vulnerabilidades, especialmente entre las poblaciones más expuestas**. Analizar estas dinámicas y sus implicaciones constituye el eje central de este documento.

El documento se divide en tres secciones principales. La primera presenta un diagnóstico de la región como un espacio bajo presión creciente, caracterizado por el aumento del impacto de los desastres climáticos y sus costos acumulados. La segunda sección analiza la relación bidireccional entre desigualdad y desastres, evidenciando cómo ambos fenómenos se retroalimentan y afectan las trayectorias de desarrollo humano. La tercera sección profundiza en los mecanismos que configuran la distribución desigual del riesgo, abordando la exposición, la vulnerabilidad y la brecha de resiliencia, y mostrando cómo estas dimensiones operan de manera interrelacionada. A partir de este análisis, el documento sienta las bases para una agenda de política orientada a integrar la reducción del riesgo de desastres en estrategias de desarrollo humano resiliente e inclusivo, que se desarrolla en la sección final.

1. Una región bajo presión: aumento de los desastres climáticos y sus costos acumulados

Entre 2000 y 2025 ALC se ha mantenido como una región altamente propensa a desastres en el mundo. Durante este período, la región registró un promedio de 67 desastres[1] por año, en comparación con los 79 desastres anuales de África Subsahariana, que es la región con mayor incidencia (Figura 1). Asimismo, ALC es la segunda región con mayor riesgo, en términos de pérdida anual esperada multi-amenaza relativa en infraestructura – con aproximadamente, USD 58,000 millones (CDRI, 2023). Estos elementos no solo reflejan una alta exposición a diferentes amenazas, sino una presión estructural creciente sobre las trayectorias de desarrollo humano.

Figura 1. A lo largo del último siglo, ALC se ha mantenido como la segunda región del mundo con más desastres

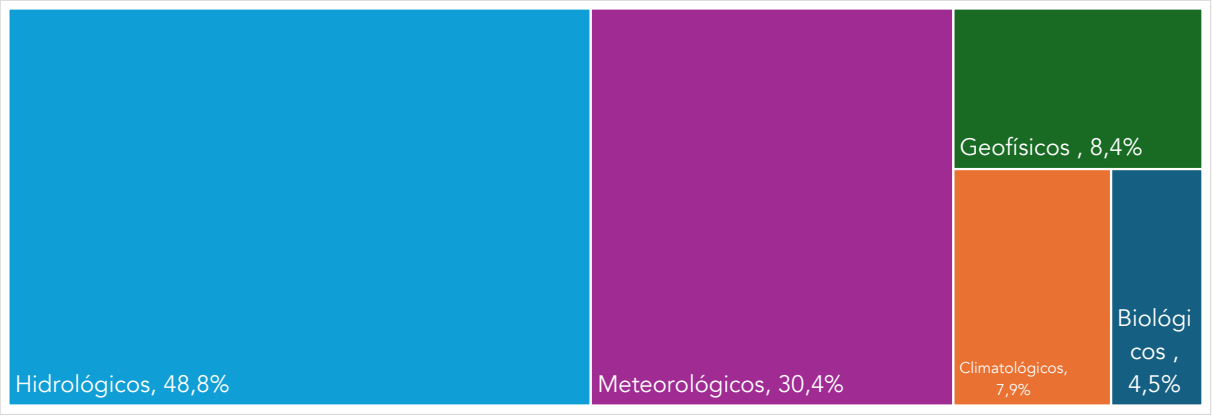


Fuente: Cálculos propios basados en EM-DAT.

1 EM-DAT

Entre 2000 y 2025, la región registró 1.741 desastres, de los cuales el 87% estuvieron relacionados con el clima. Dentro de estos, los eventos hidrológicos (que incluyen inundaciones y deslizamientos) representaron cerca de cinco de cada diez desastres, mientras que los meteorológicos (que incluyen tormentas y temperaturas extremas) concentraron aproximadamente tres de cada diez. En menor proporción se registraron los desastres geofísicos (como terremotos, derrumbes y actividad volcánica que, si bien son menores en ocurrencias, generan una parte importante de las personas afectadas por desastres) y otros eventos climatológicos (como sequías, inundaciones por desbordes glaciares e incendios forestales). Este patrón confirma que el perfil de desastres en la región está cada vez más determinado por dinámicas climáticas, lo que intensifica su carácter sistémico y persistente.

Figura 2. Cerca de 9 de cada 10 desastres en ALC en el último cuarto de siglo está relacionado al clima



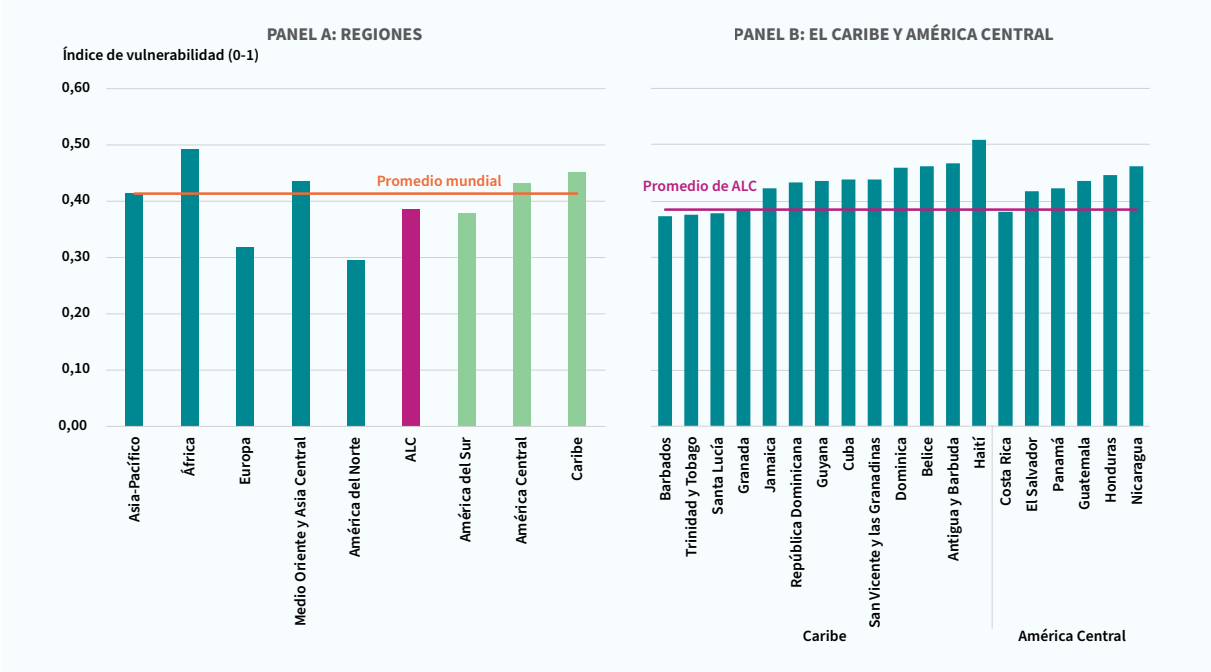
Fuente: Cálculos propios basados en EM-DAT.

El predominio de desastres climáticos en la región está asociado a una mayor exposición y vulnerabilidad a eventos críticos relacionados con la variabilidad en los patrones de este tipo de eventos y su relación con el cambio climático. Estimaciones de UNDRR, UNFPA y la Universidad de Harvard (2025) muestran la proporción de personas expuestas a amenazas en niveles medios y altos en la región. Por ejemplo, 1 de cada 5 personas está expuesta a amenaza sísmica, 1 de cada 6 a amenaza por huracán y 1 de cada 10 a amenaza por inundación, en todos los casos a niveles medios y altos.

De acuerdo al Índice de Vulnerabilidad de la Iniciativa Global de Adaptación de Notre Dame (ND-GAIN, por sus siglas en inglés)[2], ALC exhibe una vulnerabilidad menor a las perturbaciones y amenazas climáticas que otras regiones del mundo; sin embargo, existen países en América Central y el Caribe que presentan niveles significativamente más altos, lo que pone de relieve los puntos críticos dentro de la región (Figura 3). El reto para el desarrollo humano ante este panorama es garantizar que la resiliencia no sea privilegio de las naciones y comunidades más ricas, ya que esto solo ampliaría los impactos de la crisis climática y la desigualdad.

2 El índice califica la vulnerabilidad y preparación de los países frente a las perturbaciones climáticas y su capacidad de respuesta (ND-GAIN, s.f.). La vulnerabilidad mide la propensión o predisposición de las sociedades humanas a verse negativamente impactadas por las amenazas climáticas, considerando por separada la exposición, la sensibilidad, y la capacidad de adaptación. Las amenazas se evalúan en seis sectores vitales: alimentación, agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructuras.

Figura 3. América Central y el Caribe enfrentan una mayor vulnerabilidad climática en comparación con otras regiones



Fuente: PNUD. 2025

El costo creciente de los desastres en la región

Más allá de la exposición, los eventos climáticos en ALC están generando impactos acumulativos que erosionan progresivamente las capacidades productivas, fiscales y sociales de la región. Algunos de los efectos inmediatos de una mayor incidencia de desastres son la caída del crecimiento potencial debido a las pérdidas y daños; las crecientes presiones sobre las finanzas públicas, y la amplificación de las vulnerabilidades entre las poblaciones con mayores privaciones y altamente expuestas. La recurrencia de eventos aumenta el endeudamiento y la priorización de recursos hacia la respuesta, en detrimento de la prevención, refuerzan ciclos de desarrollo insostenible.

El impacto acumulado entre 2000 y 2019 superó los 300.000 millones de dólares en daños directos en la región, afectando a 152 millones de personas (PNUD, 2025). En este periodo, las pérdidas anuales equivalen al 1,7% del PIB regional (UNDRR, 2023). En el Caribe la cifra se eleva al 3%, llegando a casos extremos como el de Dominica en 2017, donde solo el impacto del huracán María representó el 226% de su PIB (UNDRR, 2023).

Es fundamental considerar que estas estadísticas oficiales son conservadoras, pues suelen tomar en cuenta solo daños directos y omitir los “millones que faltan” debido a los impactos en cascada de los desastres. Por ejemplo, de acuerdo con CDRI (2025), los costos económicos de las fallas de infraestructura son 7,4 veces mayores que el daño directo a los activos físicos. Los costos totales de los desastres a nivel global, incluyendo daños en cascada sobre salud, educación, ecosistemas y cadenas de suministro, se estiman en 2,3 mil millones de dólares anuales, casi diez veces más que las pérdidas

directas (UNDRR, 2025). Cuando las pérdidas esperadas se miden en términos de bienestar humano o caída del consumo, suelen ser un 60% superiores a las pérdiads esperadas en activos en las que se concentran las estadísticas convencionales (Bangalore et al., 2017). Estas magnitudes evidencian cómo los desastres no solo generan pérdidas puntuales, sino que, sus impactos directos y en cascada, comprometen la estabilidad macroeconómica y el espacio fiscal necesario para sostener políticas de desarrollo.

Recuadro 1. Barbados y el impacto macroeconómico del desastre

Barbados ejemplifica la fragilidad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), donde la interrupción de un activo crítico puede desestabilizar todo el sistema económico. Con el 45% de su población residiendo a menos de 5 kilómetros de la costa y una economía dependiente del turismo y el comercio, CDRI modeló el impacto de las fallas de infraestructura mediante el Modelo de Economía Verde (GEM, por sus siglas en inglés) calibrado con el índice GIRI.

Mientras que el promedio de costos económicos por fallas de infraestructura es 7,4 veces superior al daño directo en promedio entre los casos estudiados, en Barbados es de 11,3. Esto se debe al efecto cascada, que ocurre cuando una infraestructura crítica es dañada (especialmente energía, agua y transporte). Tras ser interrumpidos algunos de los servicios contenidos por la infraestructura crítica, el soporte vital de sectores estratégicos como el turismo y el comercio también se inmoviliza. Esto hace que la actividad económica se detenga mucho más allá del servicio directamente impactado por el desastre en una primera instancia.

Según el GEM, Barbados enfrentará una pérdida promedio anual del 6,9% de su PIB entre 2025 y 2050 solo por consecuencias de fallas en infraestructura, cifra que ascendería al 9,5% en 2050. En un escenario de impacto climático total (incluyendo daños a tierra, ganadería y personas), las pérdidas promedio anuales escalan al 8,8% del PIB (alcanzando el 13,3% en 2050).

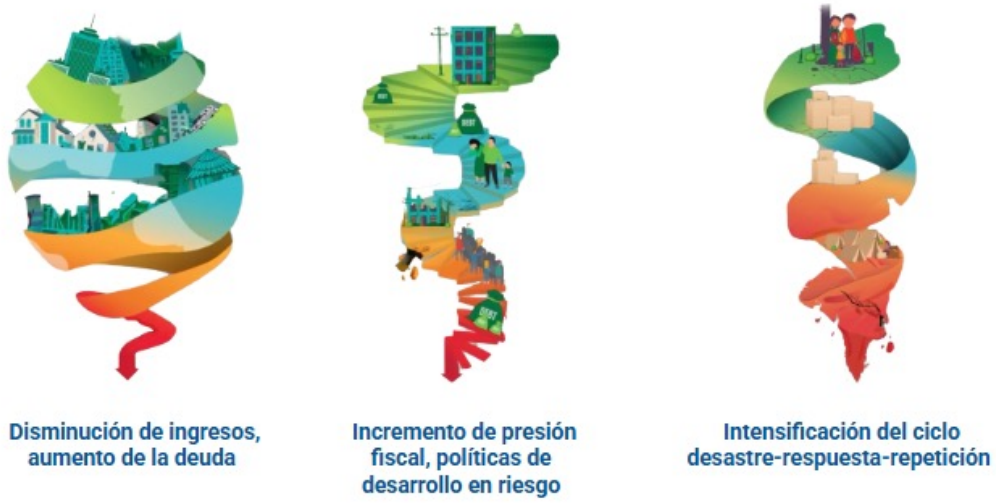
Por tanto, el desastre compromete la productividad del territorio y desvía recursos a largo plazo. La falla en redes eléctricas paraliza industrias y servicios, y el daño a puertos y carreteras bloquea el acceso de productos al mercado, lo cual debilita la competitividad del país. Cada año en que la infraestructura permanece dañada, el país sufre una pérdida acumulativa de productividad. Además, los recursos dedicados a la reconstrucción agotan las reservas nacionales y elevan la deuda pública, disminuyendo la capacidad de respuesta a futuros eventos.

Fuente: CDRI, 2025

El impacto económico generado por estos eventos y su recurrencia golpea las finanzas públicas, forzando un incremento de la deuda soberana. El Banco Asiático de Desarrollo (BDA) estudió el impacto fiscal de los desastres utilizando un panel de 184 países para el periodo entre 1995 y 2021, calibrando la simulación con parámetros de economías de mercados emergentes como una buena parte de las de ALC. Los resultados muestran que, entre los países considerados, la deuda soberana se eleva casi 2% del PIB en los dos años subsiguientes al impacto (BDA, 2024). Las causas del agravamiento del balance fiscal son la caída de ingresos tributarios y el incremento de los gastos de reconstrucción, que además provoca una salida de inversiones hacia bonos estatales en detrimento de la inversión productiva (BDA, 2024). El desplazamiento de recursos limita la capacidad de los Estados para invertir en el fortalecimiento de capacidades humanas, particularmente en sectores clave como salud, educación y protección social.

El panorama del riesgo de desastres como proceso sistémico y acumulativo permite identificar tres espirales del desarrollo insostenible. De acuerdo con UNDRR (2025), la primera espiral se inicia con las pérdidas recurrentes por desastres que agotan los activos nacionales y reducen los ingresos de los hogares, llevando al país al endeudamiento. Este endeudamiento, junto con la incertidumbre financiera, eleva el costo del capital y drena los recursos necesarios para invertir en prevención. En una segunda espiral, el impacto creciente de los desastres e incremento de la deuda eleva la presión fiscal, aumentando la brecha fiscal entre países. Que gran parte de la carga financiera sea trasladada al Estado, se debe en gran medida a la baja penetración de los seguros y el aumento de sus primas. Pero esto no solo afecta a las finanzas nacionales; cuando no hay seguros o los mismos tardan en pagar las compensaciones, los individuos deben absorber las pérdidas, lo que ralentiza la actividad económica y la recuperación general. Finalmente, las dos espirales anteriores hacen que el financiamiento se concentre desproporcionadamente en la respuesta al desastre en lugar de la resiliencia. Sin abordar las vulnerabilidades subyacentes, estas se van magnificando, y cada nuevo evento destruye lo reconstruido, perpetuando un ciclo de desastre-respuesta-repetición caracterizado por un proceso de reconstrucción de la vulnerabilidad. Por tanto, el impacto del desastre no es un fenómeno aislado, sino un factor determinante en los procesos de desarrollo.

Figura 4. Las tres espirales descendientes del desarrollo (in)sostenible



Fuente: Con base en GAR2025 (UNDRR, 2025)

Desbalance en la inversión en reducción del riesgo de desastres

Actualmente, la visión prevalente de “desastre como resultado” en vez del “riesgo como proceso” sigue predominando en la gestión del riesgo de desastres y concentrando recursos en la respuesta de emergencia y la reconstrucción. De acuerdo con el RAR24, esto implica que existe un desbalance entre los tipos de inversión en resiliencia, donde la gestión compensatoria (que aborda los impactos posteriores a los desastres) tiene mayor preponderancia que las inversiones prospectivas (que evitan la creación de nuevos riesgos) y correctivas (que reducen el riesgo existente)

Este tipo de gestión, que compromete la acción proactiva para la reducción del riesgo de desastres, dificulta el abordaje de impactos sistémicos que ya amenazan la viabilidad de sectores estratégicos. Solo en el Caribe, la exposición de la infraestructura crítica a inundaciones costeras por el aumento del nivel del mar podría representar pérdidas anuales de entre 22.000 y 46.000 millones de dólares hacia finales del siglo (Contreras, 2022).

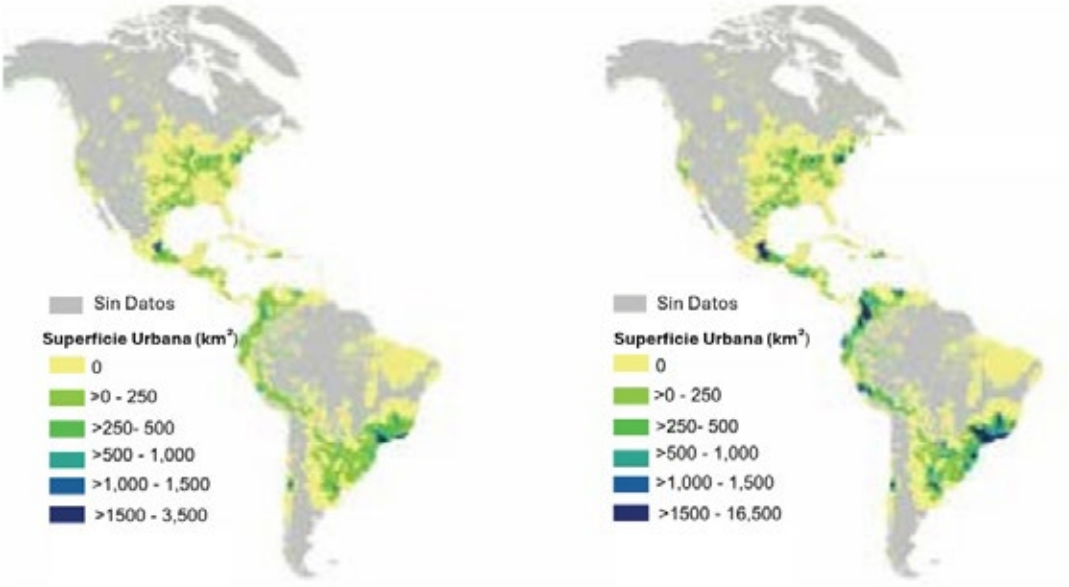
En Centroamérica, la falta de adaptación climática amenaza la base de la subsistencia, proyectándose que los rendimientos del maíz, el arroz y el frijol podrían disminuir entre un 35% y un 50% para el año 2100 (CEPAL, 2015). Ello afectaría fuertemente a los consumidores por subidas de precio, pero también a los agricultores de estos granos, quienes, a pesar de su rol esencial, ya son una población vulnerable por ser principalmente pequeños propietarios indígenas con bajo nivel de escolaridad, quienes representan el 52% de la población rural de la subregión (CEPAL, 2010).

El déficit de inversiones prospectivas y correctivas también compromete la seguridad energética regional, ya que más del 50% de la energía producida es de origen hidroeléctrico, sector que hoy es altamente vulnerable a la creciente variabilidad de las lluvias (BID, 2016). Este riesgo es también crítico en la región andina debido al acelerado derretimiento de los glaciares; en Perú, por ejemplo, el retroceso glaciar y la alteración del ciclo hídrico podrían generar un sobrecosto anual de entre 212 millones y 1.500 millones de dólares solo para la generación de energía (CEPAL, 2015). Lo mismo ocurre en Ecuador, que ya durante 2024 enfrentó una grave crisis eléctrica debido a una combinación de sequía prolongada (que redujo drásticamente la generación hidroeléctrica, principal fuente del país), limitaciones en la capacidad térmica y problemas de gestión del sistema (PNUD, 2025)

Otro de los factores del aumento del riesgo de desastres es el crecimiento urbano no planificado y la construcción informal. En América Central, se estima que, sin más inversión, este problema duplicará las pérdidas por terremotos en 2050, alcanzando 4.400 millones de dólares (UNDRR, 2024).

Como se ve en la Figura 5, las proyecciones globales para 2030 sugieren que el área urbana global bajo amenaza de inundación, sin tomar en cuenta los efectos del cambio climático, se multiplicará por 2,7 y casi la mitad de este crecimiento urbano ocurrirá en zonas con alta recurrencia de inundaciones (UNDRR, 2021). Este aumento no es solo una consecuencia del crecimiento poblacional, sino de una tendencia de expansión hacia terrenos de mayor riesgo; de hecho, casi la mitad de este nuevo crecimiento ocurrirá en zonas de alta recurrencia de inundaciones (UNDRR, 2021). Además, el terreno urbano expuesto a sequías se duplicará (UNDRR, 2021).

Figura 5. Terreno urbano en zonas con alta recurrencia de inundaciones en 2000 y 2030



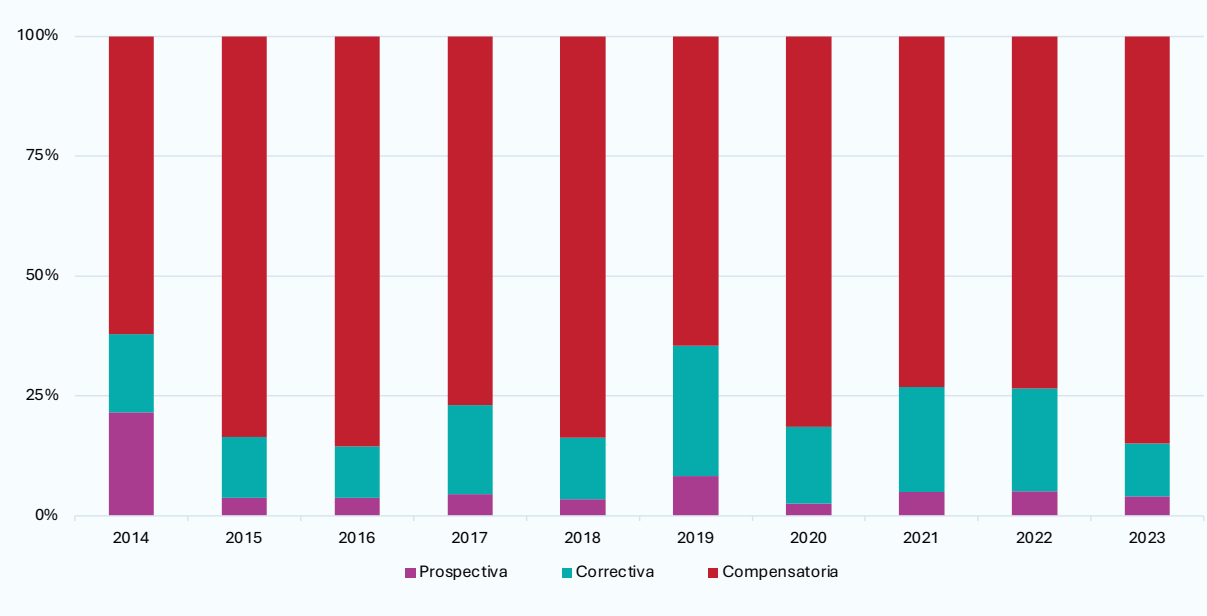
Fuente: UNDRR, 2021

Los efectos del cambio climático y los desastres sobre la reducción de recursos estratégicos, como lo son la infraestructura vital, los granos básicos, la disponibilidad energética, o el suelo, también amenazan con aumentar las desigualdades al ser sujetos de las dinámicas del mercado. De no haber regulaciones en los mercados o buscar alternativas compensatorias, los estratos de menores ingresos podrían ser sujetos a afectaciones.

Sesgos en el financiamiento de la resiliencia

A pesar del creciente número de desastres, resulta crítico que menos del 1% de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) destinada a ALC esté destinada a acciones que reduzcan el riesgo de manera explícita. Los casos de estudio del RAR24 confirman que esta tendencia se extiende también a lo nacional, ya que los presupuestos nacionales dedican apenas alrededor del 1% a la reducción del riesgo, y que la mayor parte está destinada a la respuesta frente a las emergencias (acción compensatoria) (UNDRR, 2024). Esta brecha entre el perfil del riesgo y la asignación de recursos revela una desalineación estructural en la gestión del riesgo de desastres, que subestima su carácter acumulativo.

Figura 6. Distribución del presupuesto nacional en reducción del riesgo de desastres por tipo de gestión (selección de países de ALC)



Fuente: UNDRR, 2024

Por tanto, es imperativo dejar atrás la visión del riesgo de desastres y su distribución como algo azaroso o inevitable, y asumir la responsabilidad de su gestión y reducción. Esto pasa por reconocer que la evolución exponencial del riesgo está estrechamente ligada al desarrollo desigual y a una gobernanza débil, que margina a gran parte de su sociedad, permitiendo que el riesgo se acumule en el tiempo. Para corregir esto, es necesario coordinar la mitigación, prevención, recuperación y reconstrucción con los procesos de desarrollo y las políticas de igualdad, integrando la resiliencia y la sostenibilidad como prioridad. **Esto permitirá unir las agendas de reducción de riesgo de desastres, de adaptación al cambio climático y de desarrollo socioeconómico**. Desde esta perspectiva, las inversiones en reducción del riesgo de desastres no solo disminuyen pérdidas futuras, sino que constituyen herramientas para reducir la desigualdad.

Esta integración es fundamental para romper la espiral de respuesta-recuperación-repetición, que consume recursos vitales para el progreso sostenible y que, con la creciente intensidad y frecuencia de algunos desastres, tiende a consolidarse como una trampa de desarrollo. Todos estos elementos ilustran que los desastres no solo destruyen activos, sino que erosionan directamente el bienestar y las capacidades de las personas, afectando de manera desproporcionada a quienes ya se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En un contexto de incremento de impactos de los desastres, el desafío no es únicamente responder a sus impactos, sino anticiparlos y gestionarlos de manera efectiva, evitando que operen como mecanismos que consolidan trayectorias de desarrollo insostenibles y profundizan las desigualdades preexistentes.

2. Riesgo de desastres y desigualdad

El *Informe sobre Desarrollo Humano de 2019*, centrado en las desigualdades del siglo XXI, argumentó que los desastres y el cambio climático son esteroides para potenciar las desigualdades preexistentes. En este sentido, el desafío del desarrollo humano es garantizar que la resiliencia no sea únicamente el privilegio de las naciones y comunidades más ricas, ya que esto solo ampliaría los impactos de la crisis climática y los desastres (PNUD, 2025).

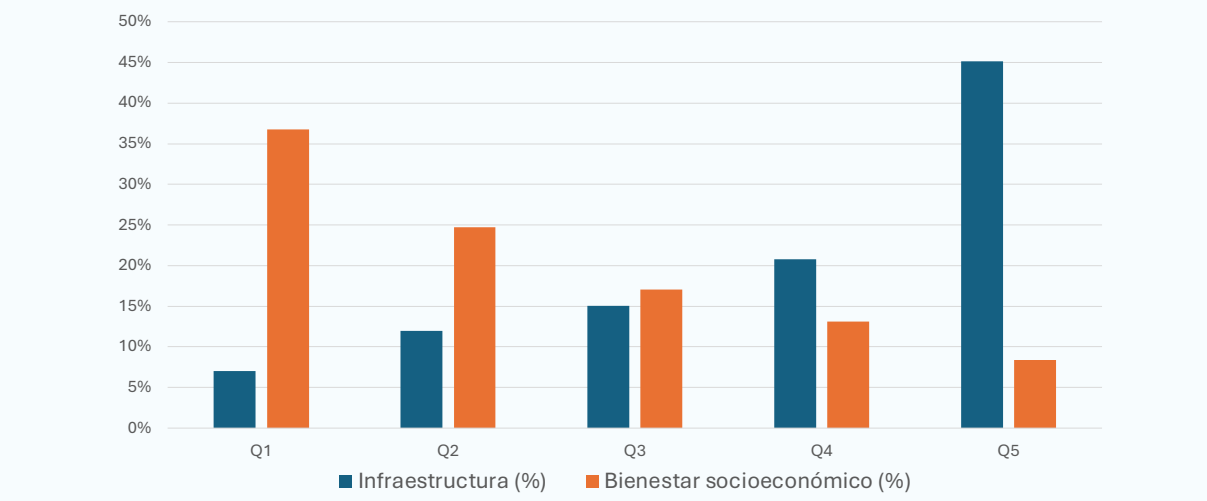
Los datos confirman que la desigualdad es un multiplicador de víctimas: Un aumento del 1% en el coeficiente Gini en países del percentil 75 de la distribución global del Índice de Gini (como Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala, México, Perú, y Ecuador) provoca que el número de personas afectadas por desastres aumente un 3,7% más que en los países más equitativos del percentil 25 (Capelli et al., 2021). Esto ilustra la dinámica del "doble golpe" de los desastres, en el que los hogares de menores ingresos experimentan más presiones para en zonas de mayor riesgo de desastres y tienen menos recursos para recuperarse y que, en contextos de desaceleración, tienden a incrementar las desigualdades dentro de las economías emergentes (Budina et al., 2023).

Entender las dinámicas entre desigualdad y el riesgo de desastres es fundamental para diseñar nuevas políticas públicas que construyan sociedades más resilientes. Actualmente, las métricas convencionales de estimación de pérdidas de activos son las más utilizadas para tomar decisiones de inversión en reducción de riesgo. Sin embargo, esas medidas presentan limitaciones, ya que estas métricas ocultan el efecto socioeconómico del riesgo sobre las comunidades afectadas y vulnerables (UNDRR, 2025).

La métrica de bienestar socioeconómico, que mide principalmente la caída de consumo, representa una alternativa complementaria. La estimación global es que cada dólar de riesgo de pérdida de activos por desastres se traduce en un riesgo de pérdida media de bienestar equivalente a dos dólares, pudiendo variar en función de la resiliencia socioeconómica del país y del hogar (Middelanis et al., 2025). Detrás de este promedio se revela una distribución desigual del riesgo. Mientras que el riesgo sobre el capital físico tiende a agruparse en los hogares de mayores ingresos, las pérdidas de bienestar afectan desproporcionadamente a los más pobres. La Figura 7 muestra que en ALC al quintil más pobre (20% de población) se le asigna solo el 7% del riesgo sobre activos, pero carga con el 37% de las pérdidas de bienestar esperadas (Middelanis et al., 2025). Estas dinámicas no son neutras en términos de género. Las mujeres, en particular aquellas en situación de pobreza o en la economía informal, enfrentan una mayor exposición a pérdidas de bienestar debido a menores niveles de ingreso y a impactos desproporcionados de los eventos climáticos extremos –por ejemplo, la exposición a un día adicional de temperaturas extremas o precipitaciones intensas se asocia con reducciones del ingreso de 1,3% y 0,5%, respectivamente, en los hogares encabezados por mujeres, lo que se traduce en pérdidas anuales promedio de hasta 8% por calor extremo y 3% por inundaciones–, así como a un acceso limitado a activos productivos y financieros y a una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado, que tiende a intensificarse en contextos de desastre, lo que restringe su capacidad de recuperación (FAO, 2024).

Basarse únicamente en pérdidas de activos evitadas puede desincentivar las intervenciones dirigidas a los hogares de menores ingresos, incidiendo en la desigualdad entre estratos sociales y dejando desatendida la seguridad humana de una parte importante de la población.

Figura 7. Distribución de pérdidas esperadas por quintiles (Promedio en ALC)



Fuente: Elaboración propia con base en Middelanis et al., 2025

Adicionalmente, este enfoque deja de lado el hecho de que inversiones de menor valor económico pueden aumentar el bienestar humano de más gente y aumentar la resiliencia general de manera más efectiva (Bangalore et. al., 2017). La mejora del bienestar, principalmente para la población más pobre, puede tomar muchas formas, como, por ejemplo, la reducción de pérdidas de ingresos, del ausentismo escolar, del retraso en el crecimiento infantil o incluso de contagios de enfermedades en el caso de pandemias.

El uso predominante de métricas de pérdidas directas en infraestructura, sesgada en favor de población de mayores ingresos, es una manifestación de un problema sistémico en detrimento de las poblaciones más vulnerables, pero también representa un problema estructural de poder y el control de recursos. Como resultado, las decisiones de actores con mayor peso económico tienden a trasladar riesgos hacia los grupos más vulnerables (CDRI, 2023).

Por ejemplo, el proceso de deforestación en Honduras, décadas antes del Huracán Mitch en 1998, que tuvo repercusiones severas en el aumento de deslizamientos de suelo e inundaciones debido a la eliminación de la capa vegetal protectora, afectando gravemente a territorios urbanos y rurales con población pobre (Lavell, 2025). Este proceso sigue existiendo ampliamente al día de hoy. En 2024, durante los incendios en la Amazonía, los más afectados fueron comunidades indígenas, habitantes de zonas rurales y ribereñas. Es importante tomar en cuenta que gran parte de los incendios amazónicos son provocados por la acción humana, principalmente como resultado del desmonte y deforestación (PNUD, 2025).

En este contexto, **el riesgo de desastres no es solo una consecuencia de las condiciones naturales, sino el resultado de decisiones económicas, institucionales y políticas que moldean quién está expuesto, quién es vulnerable y quién tiene mejores condiciones para recuperarse**. Cuando estas dinámicas no se corrigen, los desastres dejan de ser eventos aislados y se convierten en mecanismos persistentes de reproducción de la desigualdad. Abordar esta interacción requiere, por tanto, ir más allá de la gestión del riesgo de desastres como un problema técnico, e incorporar una mirada que coloque la igualdad y el bienestar en el centro de las estrategias de resiliencia. Sobre esta base, la próxima sección examina los mecanismos concretos a través de los cuales estas desigualdades se configuran y se profundizan en el tiempo por el riesgo e impacto de los desastres.

3. Configuración desigual del riesgo de desastres

Desigualdad y riesgo de desastres mantienen una relación estrecha cuyos resultados, lejos de ser fenómenos independientes, configuran un sistema en el que las condiciones previas determinan la forma en que los desastres impactan a las personas. Se reconocen tres dinámicas cuya interacción genera *trampas de desigualdad*, referidas a sistemas de retroalimentación en la que privaciones preexistentes se refuerzan mutuamente, limitando las oportunidades. Dichas dimensiones son: la exposición y vulnerabilidad desigual, y la brecha de resiliencia. Estas dimensiones no son neutras en términos de género, ya que las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres –incluyendo el acceso diferenciado a recursos, activos, tiempo y oportunidades– influyen en la forma en que el riesgo se distribuye y se experimenta.

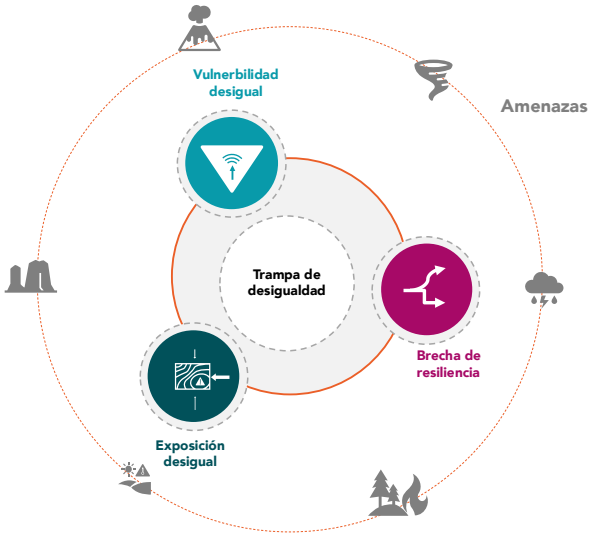
La exposición desigual refleja las privaciones derivadas de las condiciones de pobreza, y la distribución territorial y social del riesgo. Los hogares de menores ingresos, las comunidades rurales, los asentamientos informales, entre otros, suelen ubicarse en zonas más propensas a amenazas (como áreas inundables, laderas inestables o regiones expuestas a sequías), debido a restricciones económicas, dinámicas del mercado de suelo o procesos históricos de exclusión. Esta exposición no es casual y obedece a una segregación espacial que empuja a los sectores de menores recursos hacia zonas de peligro por ser las más asequibles.

La **vulnerabilidad desigual** se refiere a la capacidad diferencial de las personas y comunidades para resistir y absorber los impactos de un desastre. La población pobre es económicamente más vulnerable frente a los desastres porque está menos protegida y, en términos relativos, tiene más que perder cuando estos eventos se producen. Estos elementos actúan como un amplificador del impacto agravando sus condiciones de precariedad previas.

La **brecha de resiliencia** expresa las diferencias en la capacidad de recuperación y adaptación tras un desastre. Los hogares con acceso a ahorros, crédito, seguros o redes de apoyo pueden reconstruir sus medios de vida con mayor rapidez, mientras que aquellos sin estos mecanismos enfrentan procesos de recuperación más lentos e inciertos. A nivel agregado, estas brechas se reflejan también en la capacidad de los Estados para responder y reconstruir, dependiendo de su espacio fiscal, fortaleza institucional y acceso a financiamiento.

Adicionalmente, las **desigualdades de género** amplifican brechas existentes. A nivel global, en 2024 solo el 46,4% de las mujeres en edad de trabajar estaban empleadas, frente al 69,5% de los hombres y, al ritmo actual, se requerirían más de 190 años para cerrar esta brecha (OIT, 2025). Estas desigualdades se traducen en mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad: las mujeres y niñas están sobrerrepresentadas entre la población pobre y aquellas entre 25 y 34 años tienen un 25% más de probabilidad de vivir en pobreza extrema (ONU Mujeres, 2024). Además, cerca de 2.000 millones de mujeres y niñas carecen de protección social, lo que limita su capacidad de anticipar, absorber y recuperarse frente a shocks, brechas que se intensifican en contextos frágiles. A ello se suma una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerados, que restringe su autonomía económica y reduce su resiliencia.

Figura 8. Desastres y trampas de desigualdad



Fuente: Elaboración propia

La interacción de estas tres dimensiones da lugar a dinámicas de riesgo acumulativo, en las que la exposición, la vulnerabilidad y la limitada capacidad de recuperación se refuerzan mutuamente. En ALC las dinámicas en estas dimensiones son agravadas por la amenaza recurrente, como se mostró en la primera sección del documento. El aumento de la intensidad y variabilidad de los eventos climáticos y socioambientales son una nueva normalidad de perturbaciones e incertidumbre, que superpuestas interactúan con vulnerabilidades estructurales preexistentes (PNUD, 2025).

La relevancia de estos elementos es que la recurrencia de desastres, cuando tienen lugar en territorios vulnerables, acorta los tiempos de recuperación, erosiona progresivamente los activos de los hogares y reduce la capacidad de los sistemas públicos para responder de manera efectiva. Como resultado, los impactos no solo se acumulan, sino que se amplifican.

Exposición desigual

En ALC, la población en situación de pobreza –así como sus activos– enfrenta una mayor exposición a amenazas, resultado de mecanismos diferenciados pero complementarios en contextos urbanos y rurales. En las ciudades, esta exposición responde a patrones de segregación espacial que desplazan a los hogares de menores ingresos hacia zonas de peligro por ser las más asequibles. En los entornos rurales, en cambio, la exposición se configura a partir de una dependencia estructural de actividades productivas altamente sensibles al clima, como la agricultura, lo que expone directamente los medios de vida a variaciones en temperatura, precipitaciones y disponibilidad de agua.

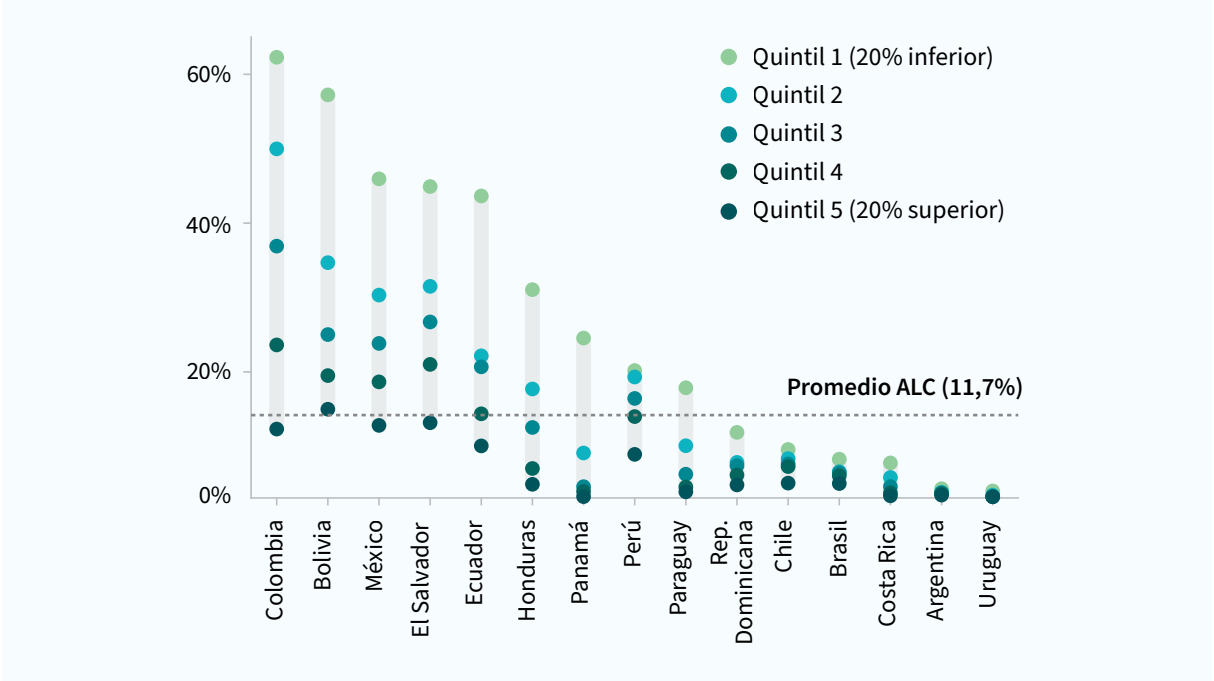
Este fenómeno adquiere especial relevancia en una región eminentemente urbana, donde el 82% de la población reside en ciudades y cerca de 1 de cada 5 habitantes vive en asentamientos informales (UNDRR, 2021). Estas dinámicas reflejan no solo la expansión urbana, sino también una reconfiguración

de la pobreza, cada vez más concentrada en entornos urbanos. En efecto, la proporción de personas pobres que viven en ciudades ha aumentado sostenidamente, pasando del 66% en 2000 a un 73% en 2022 (PNUD, 2024).

La segregación espacial es el resultado de un proceso de urbanización rápida, no planificada e irregular, así como de la degradación ambiental, que en conjunto generan nuevas amenazas socio-naturales (UNFPA & UNDRR, 2025). Como consecuencia, estas comunidades suelen asentarse en terrenos inestables –como laderas, barrancos o zonas inundables– debido a las barreras de acceso al mercado formal de vivienda (CEPAL, 2021). La ausencia de una planificación territorial que integre la gestión del riesgo, junto con dinámicas de mercado insuficientemente reguladas, configura un obstáculo estructural crítico que reproduce la exposición desigual.

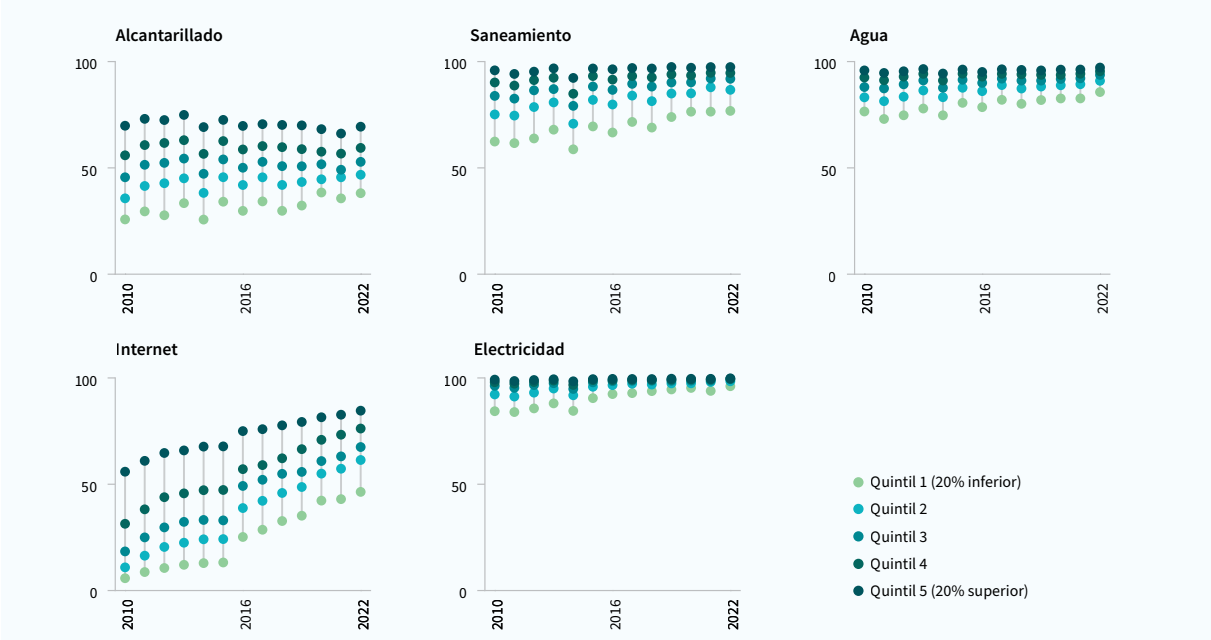
Esta desigualdad también se expresa en la calidad de la vivienda y el acceso a servicios. El quintil más pobre en la región tiene 1,8 veces más probabilidades de habitar viviendas de categoría "frágil" que el promedio (Hallegatte & Walsh, 2021), una condición que no solo depende de los materiales constructivos, sino también del entorno urbano, la provisión de servicios y el acceso a la ciudad (PNUD, 2025). La inequidad en el acceso a agua potable, saneamiento e infraestructura básica agrava aún más la exposición al riesgo.

Figura 9. Porcentaje (%) de viviendas construidas con materiales de baja calidad por nivel de ingresos



Nota: El gráfico muestra los datos disponibles más recientes para cada país: Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Paraguay (2023); Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Uruguay y Perú (2022); Bolivia y Panamá (2021); y Honduras (2019). El promedio regional se calcula como un promedio simple del porcentaje de viviendas de mala calidad reportado por SEDLAC.
Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2025, PNUD.

Figura 10. Porcentaje (%) de personas con acceso a servicios básicos por nivel de ingresos

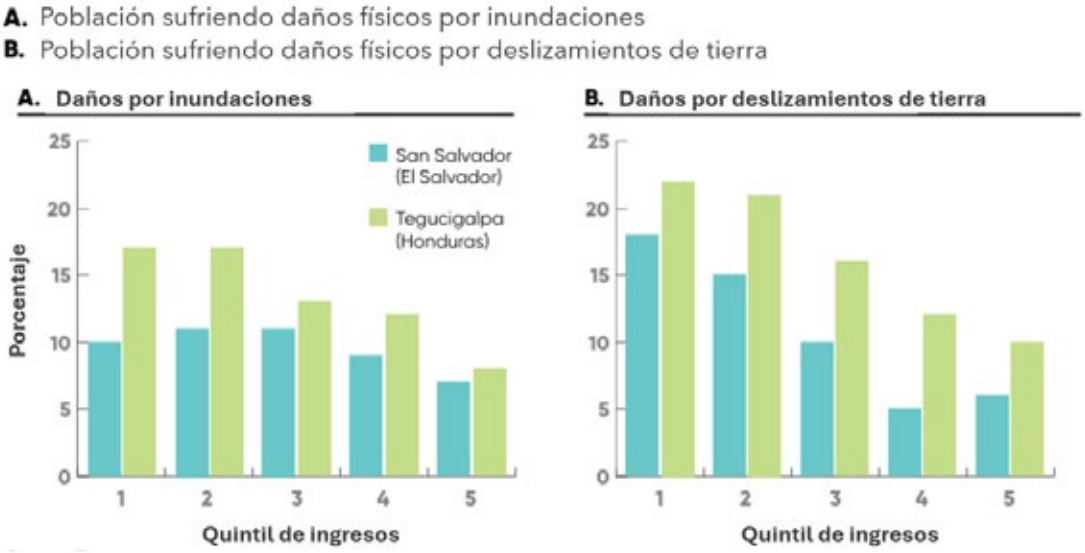


Nota: Los promedios regionales de acceso a Internet son de CEPAL. Los promedios para otros servicios son promedios simples de datos anuales por país de SEDLAC, sujetos a disponibilidad.

Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2025, PNUD.

Las dinámicas de fragilidad entre las poblaciones de menores ingresos han sido documentadas en múltiples contextos urbanos de la región por Bangalore (2017), quien muestra cómo la exposición al riesgo se distribuye de forma desigual dentro de las ciudades. Por ejemplo, en Santo Domingo, mientras el riesgo de inundación es de apenas el 6% en las zonas altas donde se concentran los hogares de mayor poder adquisitivo, el mismo se dispara al 45% en las riberas de los ríos, donde habita la población de menores ingresos. En San Salvador y Tegucigalpa, aquellos en los quintiles de ingreso más bajos tienen de dos a tres veces más probabilidades de sufrir inundaciones o deslizamientos de tierra que sus vecinos con mayores ingresos.

Figura 11. Exposición a los daños por inundación por nivel de ingresos en San Salvador (El Salvador) y Tegucigalpa (Honduras) en el año 2002



Fuente: Bangalore, 2017.

De manera similar, Bangalore (2017) documenta que, en Panamá, la vulnerabilidad ante inundaciones es un 50% superior para los pobres, mientras que, en Bogotá, el riesgo sísmico se duplica para los habitantes de menores recursos. Estos patrones se replican en diversas ciudades de la región, como Caracas, Río de Janeiro o Medellín, donde los asentamientos informales tienden a multiplicarse en laderas inestables o zonas cercanas a cuerpos de agua y sistemas de desagües desatendidos, evidenciando un patrón sistemático de localización del riesgo asociado a la desigualdad económica.

La calidad y distribución de la infraestructura urbana responden a decisiones de inversión y gobernanza que terminan concentrando a los grupos sociales más excluidos en las zonas de mayor exposición. En consecuencia, estas áreas terminan padeciendo una acumulación silenciosa de riesgo por eventos de baja intensidad que, al no estar bien documentados ni recibir atención pública, colocan a sus habitantes en situaciones cada vez más inseguras e irreversibles. En conjunto, estos procesos configuran una geografía de la desigualdad, en la que la localización territorial se convierte en un determinante clave del riesgo, consolidando patrones persistentes de exposición que condicionan las trayectorias de desarrollo humano. De hecho, como la mayoría de los eventos que afectan a la región son de baja severidad pero alta frecuencia, por ejemplo, inundaciones pequeñas o deslizamientos localizados, sus impactos están asociados a condiciones de desigualdad y pobreza, más que a la magnitud del fenómeno en sí (UNDRR, 2021).

Aunque más visibles en entornos urbanos, las dinámicas de desigualdad también se manifiestan en contextos rurales a través de mecanismos distintos. En estos entornos, la exposición al riesgo no se define solo por la localización en el territorio, sino también por la dependencia de medios de vida altamente sensibles al clima, como la agricultura. Esta dependencia configura una forma de exposición, en la que variaciones en la temperatura, las precipitaciones y la disponibilidad de agua afectan directamente la producción, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Al déficit en el acceso a servicios básicos en estos entornos se suma la inestabilidad en la infraestructura productiva, la inseguridad hídrica y alimentaria, y el acceso a recursos naturales. A diferencia de los

contextos urbanos, donde el riesgo se media por la ubicación, la infraestructura y los servicios; en las áreas rurales la exposición se encuentra estrechamente vinculada a la estabilidad de los sistemas naturales de los que dependen los medios de vida.

El cambio climático y los desastres han reducido significativamente la productividad agrícola en ALC. Se estima que el cambio climático ha contribuido a una pérdida del 25% del crecimiento total de la productividad agrícola desde 1961, particularmente en las regiones más cálidas (Ortiz-Bobea et al., 2021). Asimismo, el aumento de la humedad y las temperaturas ha reducido la capacidad laboral en el sector agrícola, con caídas de hasta un 10% en los meses más cálidos y proyecciones que alcanzan el 20% hacia 2050 (Dunne et al., 2013). En conjunto, estas dinámicas han generado pérdidas económicas significativas, estimándose que la reducción de la capacidad laboral medida como pérdida potencial total de ingresos relacionada con el calor representó el 1,34% del PIB regional en 2022, con impactos concentrados en sectores como la agricultura (Hartinger et al., 2024). El aumento de temperaturas no solo afecta la productividad laboral de los trabajadores, sino también su salud, lo cual genera pérdidas potenciales de ingresos que podrían afectar sus condiciones socioeconómicas futuras.

Estos efectos no solo disminuyen la producción y los ingresos rurales, sino que también inciden en la seguridad alimentaria y elevan los precios de los alimentos, afectando de manera desproporcionada a los hogares más pobres. Cuando las condiciones climáticas vuelven inviables las actividades productivas –por ejemplo, ante sequías prolongadas o calor extremo–, se impulsan procesos migratorios hacia las ciudades y sus periferias, especialmente hacia centros urbanos intermedios (de entre 20.000 y un millón de habitantes). De este modo, el riesgo se vuelve endógeno a lo largo del ciclo rural-urbano, reforzando patrones de desigualdad que afectan de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, personas mayores y trabajadores informales (PNUD, 2025).

Estas dinámicas evidencian que la exposición desigual al riesgo no solo depende de dónde viven las personas, sino también de los medios de vida de los que dependen, consolidando trayectorias diferenciadas de vulnerabilidad y desarrollo humano.

Vulnerabilidad desigual

Mientras la exposición define quién está en riesgo por su ubicación o vocación productiva, la vulnerabilidad determina cuánto se pierde cuando ese riesgo se materializa. En este sentido, la población en situación de pobreza no solo está más expuesta, sino que además se encuentra menos protegida y, en términos relativos, tiene más que perder frente a un mismo evento adverso.

Una de las principales fuentes de vulnerabilidad económica es el perfil más frágil y menos diversificado de los activos de los hogares pobres. A diferencia de los sectores de mayores ingresos, cuyo patrimonio suele estar compuesto por ahorros financieros y activos diversificados geográficamente, los hogares de menores recursos concentran sus activos en bienes tangibles y locales de baja liquidez. En este sentido, la vulnerabilidad no solo depende de los activos disponibles, sino también del acceso a mecanismos formales e informales de gestión del riesgo.

En entornos urbanos, los activos e inversiones tienden a tomar la forma de viviendas de baja calidad constructiva y ubicadas en zonas más expuestas a amenazas externas (Hallegatte & Walsh, 2021). Investigaciones recientes en México y Chile confirman que los sectores en pobreza crónica dependen de viviendas informales autoconstruidas que carecen de los estándares mínimos de seguridad y de acceso a servicios (Ecker et al., 2025). Así, ante un mismo evento, los impactos no son homogéneos: quienes cuentan con menos recursos y menores capacidades previas enfrentan pérdidas relativas más severas y duraderas.

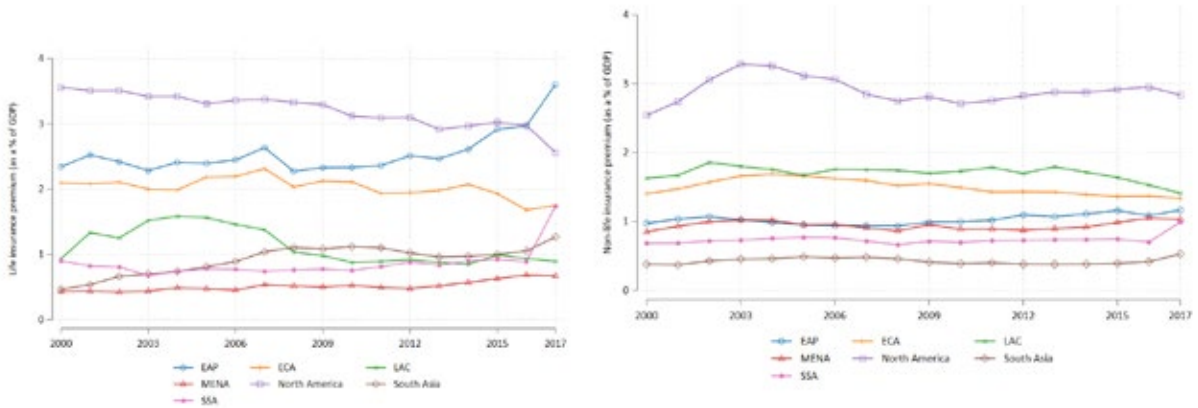
Esta desigualdad en la base de activos se traduce en una menor capacidad de absorción de los choques. Por ejemplo, el impacto patrimonial sobre las familias pobres es entre dos y tres veces más severo que el experimentado por los estratos de mayores ingresos (Bangalore, 2017). De manera similar, los hogares que carecen de ahorros sufren una caída tres veces mayor que la de aquellos con excedente financiero (BDA, 2024). En términos de riesgo en pérdidas de bienestar, el quintil de menores ingresos de ALC soporta el 37% de las pérdidas esperadas totales, casi el doble de la media (Middelanis et al., 2025). Estas dinámicas evidencian que la vulnerabilidad amplifica los efectos inmediatos de los desastres y, a su vez, condiciona la trayectoria de recuperación posterior.

Tras un desastre, la limitada capacidad de absorción obliga a los hogares más pobres a tomar decisiones críticas que comprometen su bienestar presente y futuro, como endeudarse para reconstruir o reducir el consumo esencial (UNDRR, 2024). En muchos casos, estas decisiones desencadenan lo que se conoce como una trampa de pobreza: cuando el patrimonio de un hogar cae por debajo de un nivel mínimo de subsistencia, la capacidad autónoma de recuperación se ve anulada y los hogares quedan atrapados en una situación de carencia estructural (Ecker et al., 2025). Así, los desastres no solo generan pérdidas inmediatas, sino que también pueden producir efectos irreversibles sobre el bienestar.

Estas limitaciones en la capacidad de absorción están estrechamente vinculadas a la forma en que los hogares gestionan el riesgo. Por un lado, la penetración del seguro en ALC es críticamente baja: en promedio, el valor total de las primas de seguros en 2022 equivalió a apenas el 3% del PIB de los países de la región. Además, la población de menos recursos está menos asegurada y protegida financieramente frente al desastre (Morales, 2025). También esta población es más dependiente del acceso a instrumentos financieros como transferencias sociales o apoyos post-desastre, formales e informales, para recuperarse (Hallegate & Walsh, 2021).

En consecuencia, los hogares recurren a estrategias informales de autofinanciamiento -como el uso de ahorros, la venta de activos, el endeudamiento o el apoyo de redes familiares- que, si bien pueden ser efectivas frente a choques idiosincráticos, resultan insuficientes ante eventos como desastres o crisis económicas. Estas estrategias reflejan, en gran medida, una arquitectura incompleta de la transferencia del riesgo en la región a través de mecanismos de mercado o de protección social.

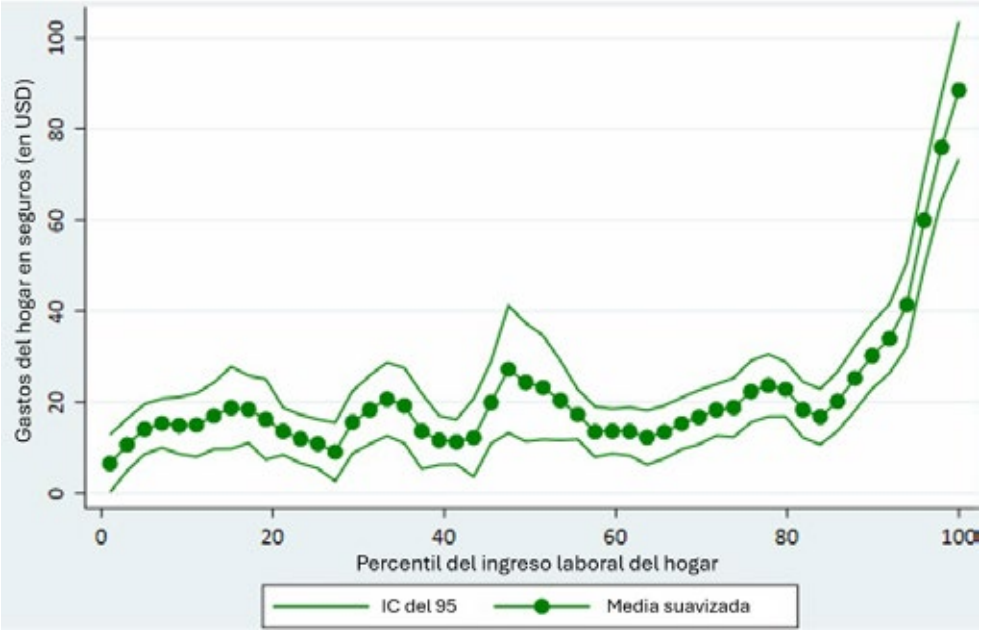
Figura 12. La penetración de seguros se mantiene baja en la región



Fuente: Morales, 2025.

La evidencia empírica muestra que el acceso a seguros en la región está fuertemente determinado por el nivel socioeconómico. Morales (2025) muestra que, en Chile y México, un aumento de un punto porcentual en el ingreso incrementa en alrededor de 4 puntos porcentuales la probabilidad de contar con seguro (seguro de vida con ahorro para Chile y cualquier seguro privado voluntario para México). Adicionalmente, en México, tener educación terciaria la eleva en cerca de 7 puntos porcentuales. En República Dominicana, el análisis señala que el gasto en seguros es altamente desigual: se mantiene por debajo de 20 dólares para el 90% de los hogares, pero supera los 80 dólares en el decil superior. Como se ilustra en la Figura 13, este patrón evidencia la fuerte concentración del aseguramiento en los estratos de mayores ingresos. En conjunto, estos datos evidencian que los mecanismos formales de aseguramiento están concentrados en los hogares de mayores ingresos, ampliando las brechas de vulnerabilidad.

Figura 13. Gasto general en seguros por nivel de ingresos en la República Dominicana en 2018



Fuente: Morales, 2025.

Esta arquitectura incompleta de aseguramiento implica que los hogares más pobres no solo enfrentan mayores riesgos, sino que además carecen de los instrumentos necesarios para gestionarlos eficazmente. Como resultado, la carga del ajuste recae desproporcionadamente sobre sus activos, su consumo y sus condiciones de vida, profundizando las desigualdades preexistentes.

En los entornos rurales, esta vulnerabilidad adquiere una dimensión adicional vinculada a la fragilidad de los medios de vida. La alta dependencia de la agricultura de secano –que incluye el 90% de las tierras fértiles– los hace directamente dependientes del régimen de lluvia y altamente vulnerables a los cambios de temperatura y precipitación (Contreras Cabral, 2022). Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a pequeños productores, predominantemente indígenas, de nivel educativo bajo y con alta incidencia de pobreza (CEPAL, 2010).

A esta dinámica se suma el nexo entre desastres e inseguridad alimentaria, que actúa como un amplificador clave de la vulnerabilidad. En los países en desarrollo, los hogares pobres destinan entre el 40% y el 60% de su gasto a alimentos, frente a alrededor del 25% en los hogares de mayores ingresos (Bangalore, 2017). Esta dependencia deja a los hogares más pobres en mayor nivel de vulnerabilidad frente a la volatilidad de precios que suele seguir a una emergencia, afectando con especial dureza a las zonas rurales donde el suministro es limitado (Hallegatte & Walsh, 2021). Evidencia reciente muestra que la inseguridad alimentaria post-desastre impacta de manera desproporcionada a hogares rurales pobres, mujeres y minorías, profundizando las brechas preexistentes (PNUD, 2025).

A pesar de los avances en la reducción de la pobreza en la región, esta forma de vulnerabilidad persiste a gran escala. Se estima que el 31% de la población en ALC se encuentra en situación de vulnerabilidad a la pobreza, mientras que un 25% permanece por debajo del umbral de pobreza (PNUD, 2025). En conjunto, esto implica que más de la mitad de la población carece de la estabilidad financiera y de los activos, mecanismos de protección o instrumentos financieros necesarios para absorber un choque, incluso moderado, sin experimentar un deterioro significativo y duradero en su bienestar.

Estas dinámicas se ven reforzadas por el carácter multidimensional de la pobreza y sus determinantes estructurales. En ALC, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los hogares en situación de pobreza y enfrentan privaciones simultáneas en dimensiones clave como autonomía económica, acceso a activos, participación en la toma de decisiones y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado. Estas restricciones limitan sus capacidades para generar ingresos, acceder a mecanismos de protección y recuperarse frente a *shocks*, profundizando así las brechas existentes en contextos de riesgo.

En conjunto, estos factores configuran una vulnerabilidad estructuralmente desigual, en la que amplios segmentos de la población enfrentan limitaciones persistentes para anticipar, resistir y recuperarse de los impactos de los desastres. Esta desigualdad no solo amplifica los efectos de los choques, sino que también condiciona las trayectorias de desarrollo humano, al reducir las capacidades efectivas para absorber, adaptarse y recuperarse del riesgo. En este contexto, la forma en que estas brechas se traducen en capacidades efectivas para hacer frente al riesgo remite directamente a una dimensión adicional: la brecha de resiliencia.

Brecha de resiliencia

La brecha de resiliencia **expresa las diferencias en la capacidad de recuperación y adaptación tras un desastre**. Más allá de la magnitud del impacto inicial, esta dimensión se refiere a la velocidad, la calidad y la sostenibilidad con la que hogares, comunidades y Estados logran restablecer sus condiciones de vida. En este sentido, dos hogares con niveles similares de exposición y vulnerabilidad pueden experimentar trayectorias de recuperación profundamente distintas. Estas diferencias se expresan no solo **en la capacidad de recuperarse**, sino también **en los tiempos de recuperación**, que pueden variar significativamente entre hogares y territorios, determinando si los efectos de un desastre son transitorios o persistentes.

Como se mencionó, el desarrollo humano resiliente busca evitar o mitigar el impacto de perturbaciones críticas generalizadas en la vida de las personas, para que disfruten la vida que valoran en términos de capacidades y agencia, y también hace especial énfasis en que **al ser golpeadas por adversidades las personas y comunidades más desfavorecidas puedan recuperarse y prosperar.**

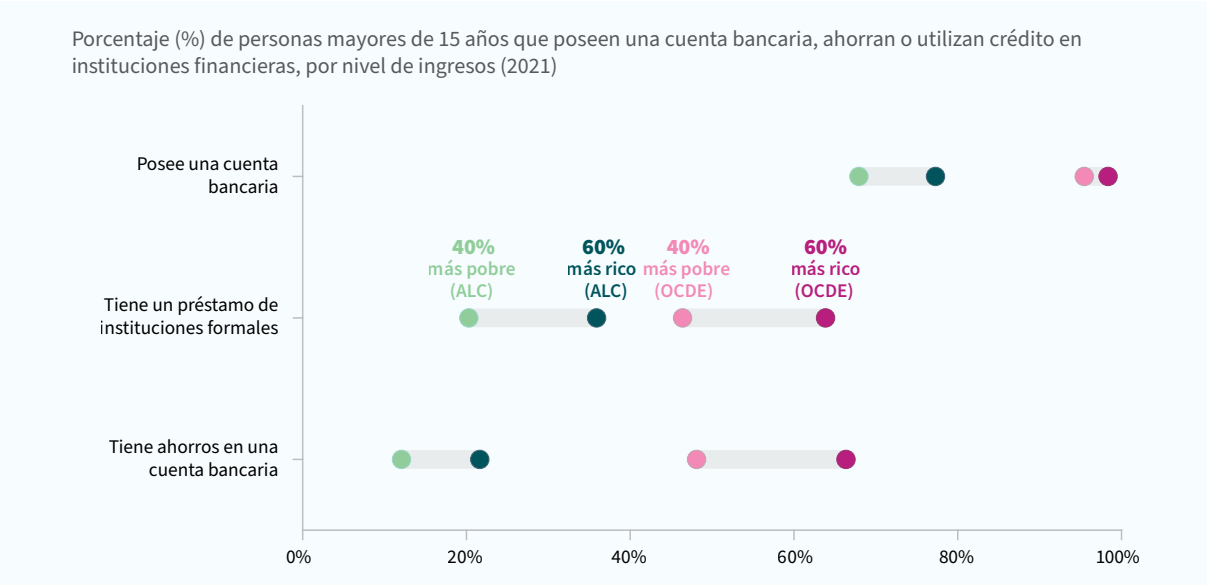
Las dimensiones anteriores han demostrado que las personas en condición de pobreza tienen menos capacidad de evitar que las pérdidas derivadas de un desastre se conviertan en deterioros permanentes del bienestar debido a los lugares donde residen, las actividades productivas que realizan,

y los recursos y activos con los que cuentan para afrontar el riesgo. En ese contexto, no es posible entender la recuperación únicamente como el resultado de la capacidad individual de sobreponerse a la adversidad, sino que se trata también de un proceso social y estructural.

El *Informe sobre Desarrollo Humano 2014* centrado en los vínculos entre desarrollo humano y resiliencia argumentó que la vulnerabilidad se puede reducir disminuyendo la incidencia de crisis y amenazas, pero la resiliencia de una sociedad permanece intacta a menos que se apliquen medidas y políticas activas para fortalecer la comunidad, eliminar las barreras a la recuperación y fomenten normas que permitan ayudar a quienes lo necesitan luego de una catástrofe (PNUD, 2014: 17). En una sociedad la vulnerabilidad individual es interdependiente a los demás, y las instituciones sociales son importantes para reducirla.

A nivel agregado, las brechas de resiliencia están estrechamente vinculadas con la capacidad de los sistemas socioeconómicos para sostener procesos de recuperación inclusivos. En ALC, la alta informalidad laboral –que alcanza al 55,1% de los trabajadores– limita el acceso a mecanismos institucionales de recuperación, afectando la continuidad de los ingresos y la protección frente a shocks (CEPAL, 2015). A ello se suma una cobertura reducida de los sistemas de protección social: a nivel global, apenas el 19% del quintil más pobre cuenta con algún tipo de protección, lo que restringe la capacidad de evitar caídas abruptas en el bienestar tras eventos adversos (Morales, 2025).
Las brechas en la inclusión financiera refuerzan estas dinámicas al limitar la capacidad de los hogares para financiar su recuperación en el corto y mediano plazo. Como se observa en la Figura 14, el acceso al crédito y a servicios financieros formales presenta marcadas desigualdades por nivel de ingresos. En México, por ejemplo, mientras el 47% de la población de mayores ingresos accede al crédito bancario, solo el 15% de la población en pobreza crónica lo hace (Ecker et al., 2025), lo que restringe significativamente las posibilidades de diferir los costos de la reconstrucción.

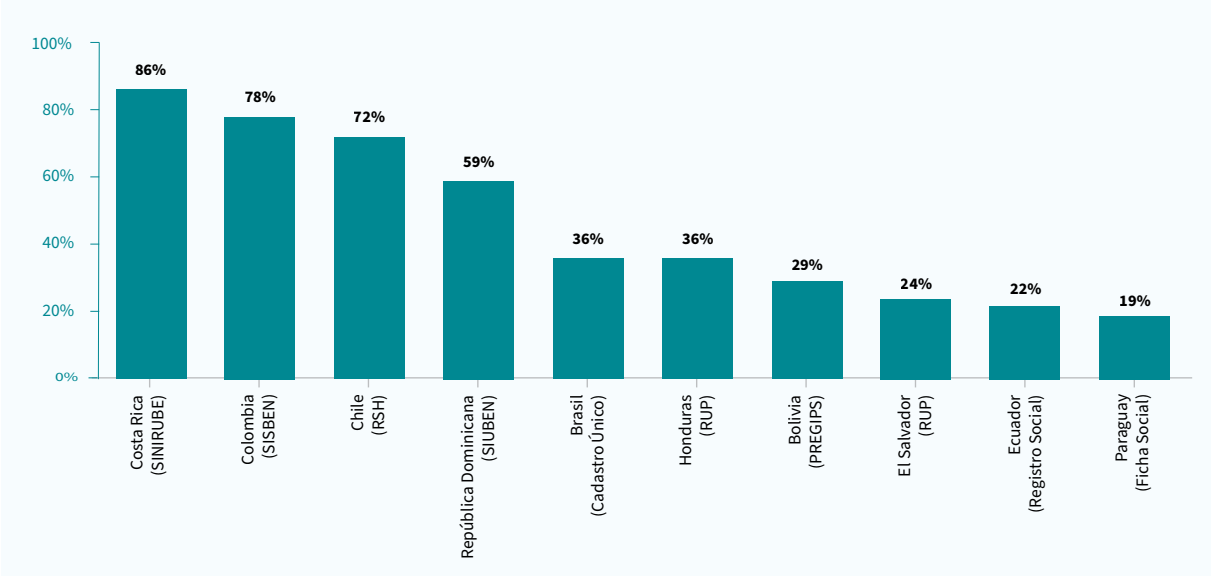
Figura 14. Las brechas de inclusión financiera



Fuente: PNUD, 2025.

La brecha de resiliencia también se expresa más allá de los hogares y se refleja en la capacidad desigual de los Estados para responder y reconstruir. Factores como el espacio fiscal, la fortaleza institucional y el acceso a financiamiento determinan la posibilidad de implementar respuestas oportunas y sostenidas. Asimismo, la capacidad operativa del Estado –incluyendo la coordinación interinstitucional, la velocidad de respuesta y la capacidad de implementación en el territorio– resulta determinante para definir la calidad de los procesos de recuperación. En este contexto, la calidad de los sistemas de información resulta crítica. Aunque Berner y Van Hemelryck (2020) señalaron que seis países de la región alcanzaban una cobertura de registros sociales superior al 70%, estimaciones más recientes del PNUD (2025) muestran que este sigue siendo un reto estructural: solo Costa Rica, Colombia y Chile mantienen niveles por encima de ese umbral, mientras que en otros seis países de ALC (Brasil, Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Paraguay) la cobertura es menor del 50% de la población.

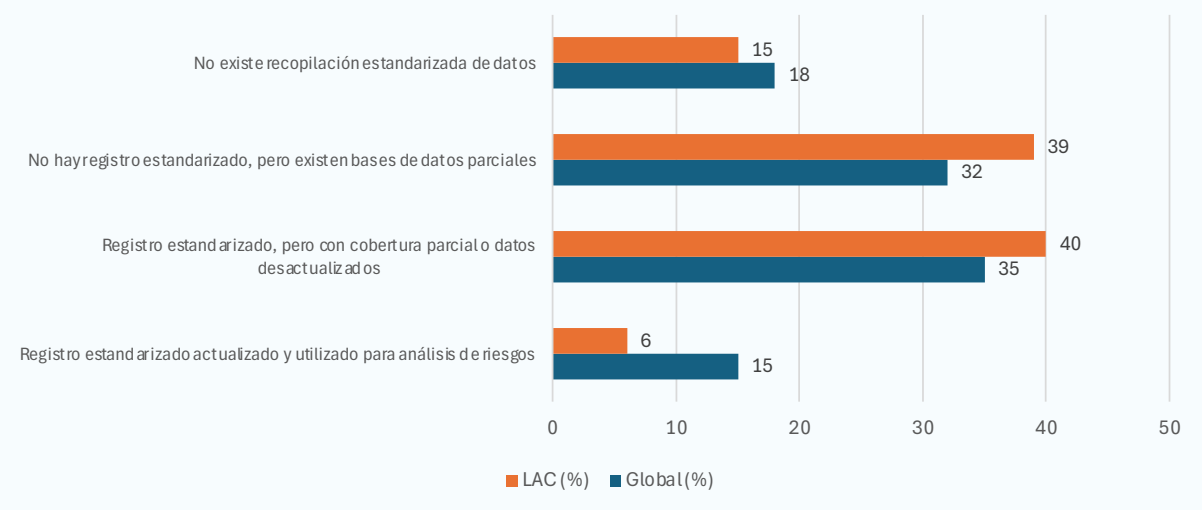
Figura 15. Proporción (%) de la población cubierta por registros sociales en países de ALC



Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2025, PNUD.

De manera similar, la ausencia de registros adecuados de activos de infraestructura limita la capacidad de anticipar daños y priorizar la reconstrucción. Según evidencia reciente, solo el 6% de los países de ALC cuenta con registros estandarizados, actualizados y utilizados sistemáticamente para el análisis de riesgo (CDRI, 2025). Estas debilidades generan discontinuidades en la acción estatal y contribuyen a la formación de territorios donde la recuperación es más lenta, incompleta o incluso inviable. Estas situaciones son particularmente visibles en territorios con menor presencia estatal o mayores restricciones estructurales, donde los procesos de recuperación tienden a ser más prolongados y desiguales.

Figura 16. Registros de activos de infraestructura en ALC y a nivel global (porcentaje)



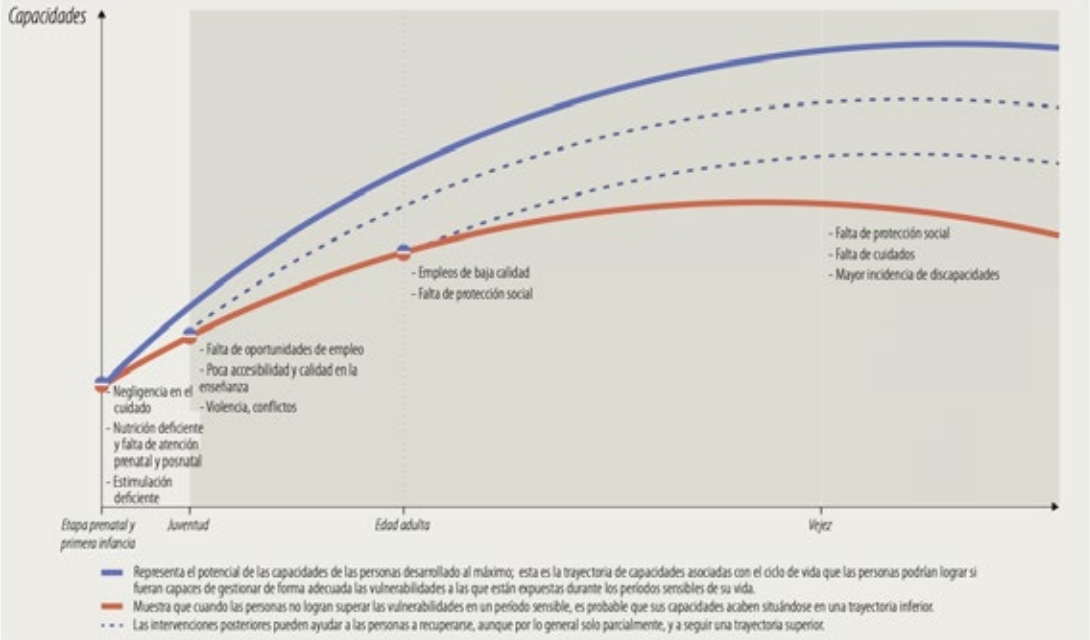
Fuente: CDRI, 2025.

Estas dinámicas configuran una brecha de resiliencia en la que la capacidad de recuperación no solo varía entre hogares, sino también entre territorios y países. Asimismo, la calidad de la recuperación resulta determinante: en muchos casos, los hogares reconstruyen en condiciones similares o incluso más precarias, perpetuando su vulnerabilidad. Esta brecha determina si los impactos de los desastres se traducen en interrupciones temporales o en retrocesos estructurales del desarrollo humano.

Desde una perspectiva de ciclo de vida, estas diferencias adquieren una dimensión adicional. Las capacidades se construyen y transforman a lo largo del tiempo y son altamente dependientes de trayectorias previas y del entorno social (PNUD, 2014). En este sentido, el momento en que ocurre un shock y la velocidad de recuperación posterior son determinantes para sus efectos de largo plazo. Choques en etapas críticas –como la primera infancia o la juventud– pueden generar pérdidas persistentes en capacidades si la recuperación es lenta o incompleta, mientras que en etapas posteriores pueden consolidar vulnerabilidades acumuladas.

Como ilustra la Figura 17, las capacidades pueden seguir una trayectoria cercana a su potencial o desviarse hacia niveles más bajos en contextos de vulnerabilidad. La brecha entre estas trayectorias refleja no solo el impacto inicial del *shock*, sino también la capacidad –y el tiempo– de recuperación. De esta manera, perturbaciones aparentemente transitorias pueden volverse permanentes cuando no existen condiciones adecuadas para una recuperación oportuna, desviando de forma duradera las trayectorias de desarrollo humano.

Figura 17. Inversiones en capacidades para la vida a lo largo de la vida



Fuente: PNUD, 2014.

Así, mientras la vulnerabilidad define la magnitud de la pérdida en función de la intensidad de un evento de amenaza, la resiliencia determina si esa pérdida es transitoria o permanente, consolidando –o revirtiendo– las desigualdades existentes. En este sentido, la resiliencia no solo refleja las desigualdades, sino que actúa como un mecanismo a través del cual estas se reproducen o transforman en el tiempo.

Recuadro 2. Dos maneras de afrontar el desastre según la condición socioeconómica

Mientras los hogares de mayores recursos se adaptan y amortiguan el riesgo de manera tradicional: diversifican sus ingresos, están cubiertos por seguros, tienen ahorros que alivian su consumo y buscan estrategias de reserva alternativas; los hogares más pobres lidian con el impacto a sus ingresos y activos con estrategias de subsistencia reactivas (Ecker et al., 2025).

En primer lugar, estos hogares limitan su consumo inmediatamente. Por ejemplo, en Guatemala, tras la tormenta Agatha en 2010, el gasto per cápita se desplomó un 5,5%, lo que derivó en un incremento de la pobreza del 14% (Bangalore, 2017). A escala mundial, el consumo de los hogares que carecen de ahorros líquidos cae tres veces más rápido que el de aquellos con excedentes financieros por no tener recursos para suavizar el gasto (BDA, 2024).

Además, el recorte de recursos también golpea la salud. El desastre puede desencadenar crisis sanitarias que se llevan el presupuesto familiar al combinar la pérdida de ingresos con el alto costo de los servicios médicos (Ecker et al., 2025).

Por otra parte, las mujeres pobres, tienden a salir del mercado laboral para dedicarse a la reconstrucción y los cuidados (PNUD, 2025). Además, hay mayor probabilidad de sacar a los niños del colegio para aumentar los ingresos a corto plazo. Por ejemplo, tras el huracán Mitch en Nicaragua, la participación de niños en la fuerza laboral aumentó un 58%, y el porcentaje de niños que debían estudiar y trabajar simultáneamente pasó del 7,5% al 15,6% (CDRI, 2025). También en Guatemala, después del huracán Stan de 2005, la probabilidad del trabajo infantil subió un 7% en las zonas afectadas (Bangalore, 2017).

Finalmente, ante la emergencia, los hogares de bajos ingresos tienden a vender los pocos activos productivos que les quedan a cambio de un ingreso inmediato, así como a migrar a lugares urbanos, aumentando la presión en esos espacios (Capelli et al., 2021). Finalmente, la vulnerabilidad ante el riesgo también afecta las decisiones de inversión. Se dedica menos presupuesto a la solidez y resiliencia de la vivienda por temor a que un nuevo desastre o un desahucio anule la inversión realizada. En la actividad agrícola, los más pobres y vulnerables al riesgo se decantan por el cultivo de productos con alta tolerancia al clima pero de escaso valor añadido (Capelli et al., 2021). Esto es una decisión defensiva que garantiza la subsistencia mínima, pero impide el crecimiento económico.

Estas decisiones perpetúan la precariedad a través de generaciones, socavan gravemente el capital humano y sumen a las familias en un ciclo de pobreza, vulnerabilidad al riesgo y aumento de la desigualdad.

4. Recomendaciones de política pública

Los hallazgos de este documento evidencian que el riesgo de desastres en ALC no es un fenómeno azaroso ni natural, sino el resultado de procesos de desarrollo desiguales que determinan quién está expuesto, quién es más vulnerable y quién puede recuperarse mejor. En este contexto, los desastres no solo interrumpen las trayectorias de desarrollo, sino que operan como mecanismos que reproducen y profundizan las desigualdades, configurando espirales de desarrollo insostenible.

Romper el ciclo entre desigualdad y desastres requiere de una agenda que vaya más allá de la gestión reactiva de las emergencias e integre la reducción del riesgo de desastres como un elemento central del desarrollo. En ese marco, el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 propuso en su marco de recomendaciones las tres "I" –instrumentos, instituciones e infraestructura– como mecanismos para avanzar en el desarrollo humano resiliente. A partir de este esquema, y con base en los hallazgos de este documento se proponen algunas líneas de acción que, de acuerdo con el RAR24, se distribuyen entre acciones de carácter prospectivo (mitigar el riesgo de desastres futuro), correctivo (reducir el riesgo de desastres existente) y compensatorio (abordar el riesgo residual).

Instrumentos

Uno de los hallazgos centrales del análisis es que la forma en que se mide el riesgo condiciona la forma en que se toman decisiones de inversión. Las métricas convencionales, centradas en pérdidas de activos, subestiman los impactos reales sobre el bienestar, las cuales suelen ser en detrimento de las personas con menos capacidad económica. Algunos instrumentos que pueden contribuir a medir mejor el riesgo para una mejor toma de decisiones son:

- **Adopción de normas de No Aumento Neto del Riesgo de Desastre (*No Net Disaster Risk Increase Rule*)**, en la aprobación de nuevos proyectos o intervenciones en infraestructura pública y privada para evitar incrementos en el riesgo en sus zonas de influencia.

- **Implementar clasificadores presupuestarios de resiliencia sensibles al género y a la inclusión**, que permitan identificar, monitorear y orientar el gasto público a la reducción del riesgo de desastres, a la resiliencia, y adaptación al cambio climático.

- **Fiscalidad distributiva a través de recuperación de plusvalías.** Canalizar recursos de la valorización del suelo para proteger a las comunidades más vulnerables.

- **Integración de criterios de resiliencia en créditos y otros productos financieros para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs)**. Estas empresas representan una parte significativa del empleo y cadenas de suministro para poblaciones vulnerables y su resiliencia permite mantener operativos servicios críticos.

Instituciones

La distribución del riesgo de desastres está profundamente influida por decisiones y omisiones institucionales, estructuras de poder socioeconómico y dinámicas de gobernanza. Avanzar hacia sociedades más resilientes requiere fortalecer las capacidades institucionales para integrarlo con otras agendas de política pública. Algunos elementos que pueden contribuir desde esta dimensión son:

- **Integrar métricas de riesgo en bienestar dentro de los Sistemas de Inversión Pública (SNIP)**, incorporando pérdidas de bienestar socioeconómico para complementar y evitar sesgos en las métricas de riesgo directo de activos.

- **Fortalecer la integración de dimensiones de desarrollo social, planificación territorial y gestión de riesgo**, para superar enfoques fragmentados y contribuir a la recuperación de las poblaciones excluidas al ser golpeadas por la adversidad, bajo la idea de recuperar y prosperar con un enfoque de reconstruir mejor (*build back better*).

- **Incorporar de manera sistemática el enfoque de género e interseccionalidad en la gobernanza del riesgo**, asegurando la participación efectiva de mujeres –incluyendo mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes– en los procesos de planificación, toma de decisiones y recuperación.

- **Desarrollar sistemas de protección social adaptativos y paramétricos**, con capacidad de pronosticar choques y favorecer la acción anticipatoria con prioridad en las poblaciones más vulnerables.

Infraestructura

La infraestructura desempeña un papel central en la configuración del riesgo y en las oportunidades de desarrollo. La infraestructura no solo reduce exposición, sino que bien diseñada y construida define oportunidades de desarrollo y condiciones de resiliencia. Su diseño, localización y calidad determinan tanto la exposición como la capacidad de recuperación de las poblaciones. En esta dimensión se propone:

- **Mejoramiento de asentamientos informales *in situ*.** Ejecutar programas de reducción de vulnerabilidades en asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo mitigable a través de programas participativos de mejoramiento resiliente.

- **Implementación de esquemas de seguros colectivos de vivienda a nivel municipal**, que reduzcan las asimetrías en poder adquisitivo y permitan una recuperación más rápida.

- **Desarrollar bancos de suelos fiscales para mejorar la resiliencia de la vivienda social**, priorizando la localización de vivienda social.

- **Ampliar las opciones disponibles en los sistemas de pagos digitales**, incorporando alternativas que incluyan a la población no bancarizada (por ejemplo, a través de retiros electrónicos con documento de identificación).

- **Gestión de pasivos contingentes sensibles a la desigualdad**. Integrar el riesgo de desastres en la estrategia fiscal, considerando que el complemento entre inversión correctiva que considere la distribución desigual del riegso y la ampliación de mecanismos de protección financiera.

Romper el ciclo entre desigualdad y desastre

Romper el ciclo entre desigualdad y desastres requiere reconocer que el riesgo es endógeno a los procesos de desarrollo y que su reducción debe integrarse en las decisiones estructurales de política pública. En este sentido, la gestión del riesgo no puede seguir tratándose como un ámbito aislado, sino como un componente central de la planificación territorial, la política social y la inversión pública.

Avanzar hacia un desarrollo humano resiliente implica no solo reducir la exposición a amenazas, sino transformar las condiciones que generan vulnerabilidad y asegurar que la recuperación sea de una forma sensible a la distribución desigual del riesgo de desastres. Solo así será posible romper las espirales de desarrollo insostenible y construir trayectorias más inclusivas y resilientes para la región.

Bibliografía

Bangalore, M.; Hallegatte, S.; Vogt-Schilb, A.; Rozenberg, J. (2017). Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters. Climate Change and Development Series. Washington, DC: World Bank.

Budina, N.; Chen, L. & Nowzohour, L. (2023). Why Some Don't Belong – The Distributional Effects of Natural Disasters. IMF Working Papers.

Capelli, F.; Costantini, V. & Consoli, D. (2021). The trap of climate change-induced "natural" disasters and inequality. Global Environmental Change, 70, 102329.

CDRI (2023). Global Infrastructure Resilience 2023: Capturing the Resilience Dividend - A Biennial Report from the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, New Delhi.

CDRI (2025). Global Infrastructure Resilience 2025 Report. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, New Delhi.

CEPAL (2010). Impactos potenciales del cambio climático sobre los granos básicos en Centroamérica. México, D. F., CEPAL/Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)/ Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

CEPAL (2015). La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: Paradojas y desafíos del desarrollo sostenible. Naciones Unidas, Santiago.

CEPAL (2021). Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe (LC/CDS.4/3). Santiago.

Contreras Cabral, Y. (2022). El cambio climático y sus efectos en la economía de la región de América Latina y el Caribe. Observatorio Medioambiental, 25, 133-152.

Ecker, S., Martinez-Aguilar, S., and Ortiz-Juarez, E. (2025). Unequal Assets, Uneven Resilience: Mapping Poverty Quadrants and Opportunities. Serie de Documentos de Trabajo N° 51 del PNUD para ALC.

Esquivel, M., Grunwaldt, A., Paredes, J. R., & Rodríguez-Flores, E. (2016). Vulnerability to Climate Change of Hydroelectric Production Systems in Central America and their Adaptation Options: Executive Summary. Banco Interamericano de Desarrollo.

FAO (2024). The unjust climate – Measuring the impacts of climate change on rural poor, women and youth. Roma: FAO.

Lavell, A. y Gamarra, L. (2024). Recovery and disaster risk reduction in Central America: Reflections and unanswered questions 25 years after Hurricane Mitch. UNDP discussion paper 25.

Le, A. H., Park, D., Beirne, J., & Uddin, G. S. (2024). Disaster risk, Inequality and Fiscal Sustainability. ADB Economics Working Paper Series N°. 750. Asian Development Bank.

Gamarra, L., Loubaud, G. y Kattan, S. (2025). Addressing the Complexity of Climate Induced Loss and Damage: Reflections on UNDP Technical Support to Belize, El Salvador and Mozambique. PNUD.

Hallegatte, S. & Walsh, B. (2021). Natural disasters, poverty and inequality: New metrics for fairer policies. In É. Laurent & K. Zwickl (Eds.), The Routledge handbook of the political economy of the environment (1st ed., pp. 111–131). Routledge.

Klusak, P., Agarwala, M., Burke, M., Kraemer, M., & Mohaddes, K. (2023). "Rising Temperatures, Falling Ratings: The Effect of Climate Change on Sovereign Creditworthiness." Management Science, 69 (12): 7468–91.

Lavell, Allan (2025). Redefining Socio-Natural Resilience within the Human Development Framework: Disaster, Risk and Resilience in Latin America and the Caribbean. Serie de Documentos de Trabajo N° 47 del PNUD para ALC.

Middelanis, R., Jafino, B. A., Hill, R., Nguyen, M. C., & Hallegatte, S. (2025). Global Socio-economic Resilience to Natural Disasters. Policy Research Working Paper 11129, World Bank.

Morales Cerda, Matías. (2025). Sharing risks beyond social insurance in Latin America and the Caribbean. Serie de Documentos de Trabajo Nº 48 del PNUD para ALC.

OECD et al. (2025). Latin American Economic Outlook 2025: Promoting and Financing Production Transformation. París: OECD Publishing.

ILO. (2025). Base de datos de estimaciones y proyecciones modeladas de la OIT (ILOEST). Ginebra: ILOSTAT.

ONU Mujeres. (2024). World Survey on the Role of Women in Development 2024: Harnessing social protection for gender equality, resilience and transformation. Nueva York: ONU Mujeres.

Ortiz-Bobea, A., Ault, T. R., Carrillo, C. M., Chambers, R. G., & Lobell, D. B. (2021). Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth. Nature Climate Change, 11 (4): 306–12.

PNUD. (2014). Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Nueva York.

PNUD. (2024). The Changing Faces of Poverty in Latin America and the Caribbean. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2025). Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025. Bajo presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe. Nueva York.

UNDRR y CRED (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres). (2020). El costo humano de los desastres: una mirada a los últimos 20 años (2000–2019). Ginebra.

UNDRR. (2021). Promoting Synergy and Alignment between Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in the Context of National Adaptation Plans: A Supplement to the UNFCCC NAP Technical Guidelines. Ginebra.

UNDRR. (2024). Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR 24). Del riesgo a la resiliencia: inversiones estratégicas para un futuro sostenible. Ciudad de Panamá.

UNDRR. (2025). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2025 (GAR2025). Resilience Pays: Financing and Investing for Our Future. Ginebra.

UNFPA y UNDRR. (2025). Inteligencia demográfica para la reducción del riesgo de desastres: estimación de la exposición de la población a múltiples amenazas en América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá.

PNUD LAC C19 PDS Nº. 1
Un marco conceptual para analizar el impacto económico del COVID-19 y sus repercusiones en las políticas
Constantino Hevia y Andy Neumeyer

PNUD LAC C19 PDS Nº. 2
Sugerencias para la Emergencia
Santiago Levy

PNUD LAC C19 PDS Nº. 3
El impacto económico del COVID-19 en Venezuela: la urgencia del financiamiento externo
Daniel Barráez y Ana María Chirinos-Leañez

PNUD LAC C19 PDS Nº. 4
Impacto socioeconómico del COVID-19 y opciones de política en Honduras
Andrés Ham

PNUD LAC C19 PDS Nº. 5
COVID-19 y el shock externo: Impactos económicos y opciones de política en el Perú
Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo

PNUD LAC C19 PDS Nº. 6
Impacto Social y Económico de la COVID-19 y opciones de políticas en Argentina
María Laura Alzúa y Paula Gosis

PNUD LAC C19 PDS Nº. 7
La cooperación financiera internacional frente a la crisis económica latinoamericana
José Antonio Ocampo

PNUD LAC C19 PDS Nº. 8
COVID-19 y la protección social de las personas pobres y los grupos vulnerables en América Latina: un marco conceptual
Nora Lustig y Mariano Tommasi

PNUD LAC C19 PDS Nº. 9
Impacto social y económico de COVID-19 y opciones de políticas públicas en Jamaica
Manuel Mera

PNUD LAC C19 PDS Nº. 10
Impacto Social y Económico de la COVID-19 y opciones de políticas en Uruguay
Alfonso Capurro, Germán Deagosto, Federico Ferro, Sebastián Ithurralde y Gabriel Oddone

PNUD LAC C19 PDS Nº. 11
El coronavirus en Colombia: vulnerabilidad y opciones de política
Andrés Álvarez, Diana León, María Medellín, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta

PNUD LAC C19 PDS Nº. 12
COVID-19 y vulnerabilidad: una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador
Rodrigo Barraza, Rafael Barrientos, Xenia Díaz, Rafael Pleitez y Víctor Tablas

PNUD LAC C19 PDS Nº. 13
Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama socioeconómico
Oficina del PNUD en México

PNUD LAC C19 PDS Nº. 14 A
Lecciones del COVID-19 para una agenda de sostenibilidad en América Latina & Caribe
Diana Carolina León y Juan Camilo Cárdenas

PNUD LAC C19 PDS Nº. 14 B
Latinoamérica y el Caribe: Riqueza natural y degradación ambiental en siglo XXI
Diana Carolina León y Juan Camilo Cárdenas

PNUD LAC C19 PDS Nº. 15
Impacto económico y social del COVID-19 y opciones de política en la República Dominicana
Sócrates Barinas y Mariana Viollaz

PNUD LAC C19 PDS Nº. 16
Nota técnica de Las Bahamas: Impacto del COVID-19 y opciones de políticas públicas
Manuel Mera

PNUD LAC C19 PDS Nº. 17
Impulsando la recuperación socioeconómica en Paraguay – Estrategias de reactivación frente al COVID-19
Oficina del PNUD en Paraguay

PNUD LAC C19 PDS Nº. 18
El Coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres en América Latina
Diana Gutiérrez, Guillermina Martin, Hugo Ñopo

PNUD LAC C19 PDS Nº. 19
Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe
Arachu Castro

PNUD LAC C19 PDS Nº. 20
COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe
Sandra García Jaramillo

PNUD LAC C19 PDS Nº. 21
Planeando una recuperación sostenible para la pospandemia en América Latina y el Caribe
Mauricio Cárdenas and Juan José Guzmán Ayala

PNUD LAC C19 PDS Nº. 22
COVID-19 en Bolivia: En la senda de la recuperación del desarrollo
Oficina de PNUD Bolivia

PNUD LAC C19 PDS Nº. 23
¿Necesitamos repensar la política de deuda en Latinoamérica?
Federico Sturzenegger

PNUD LAC C19 PDS Nº. 24
Respuestas para enfrentar la pandemia en América Latina y el Caribe: el uso de programas de transferencias monetarias y de sistemas de información de protección social
Guillermo M. Cejudo, Cynthia L. Michel y Pablo de los Cobos

PNUD LAC C19 PDS Nº. 25
Los impactos del COVID-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe
Paola Bergallo, Marcelo Mangini, Mariela Magnelli y Sabina Bercovich

PNUD LAC C19 PDS Nº. 26
El cementerio invisible del COVID-19: pérdidas intergeneracionales para la niñez y adolescencia más pobre y medidas para abordar una pandemia de desarrollo humano
Orazio Attanasio y Ranjita Rajan

PNUD LAC C19 PDS Nº. 27
A resposta da proteção social à COVID-19 no Brasil
André Portela Souza, Lycia Lima, Camila Magalhaes, Gabriel Marcondes, Giovanna Chaves, Juliana Camargo, Luciano Máximo (FGV EESP Clear)

PNUD LAC PDS Nº. 28
El sistema tributario colombiano: diagnóstico y propuestas de reforma
Leopoldo Fergusson y Marc Hofstetter

PNUD LAC PDS Nº. 29
Las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania sobre América Latina y el Caribe
Mauricio Cárdenas y Alejandra Hernández

PNUD LAC PDS Nº. 30
La complejidad del fenómeno migratorio en México y sus desafíos
Elena Sánchez-Montijano y Roberto Zedillo Ortega

PNUD LAC PDS Nº. 31
La migración en la República Dominicana: contexto, retos y oportunidades
Daniel Morales y Catherine Rodríguez

PNUD LAC PDS Nº. 32
Situación migratoria en Chile: tendencias y respuestas de política en el período 2000-2021
Carolina Stefoni y Dante Contreras

PNUD LAC PDS Nº. 33
Migración y política migratoria en el Ecuador en el período 2000-2021
Gioconda Herrera

PNUD LAC PDS Nº. 34
Migración en Colombia y respuestas de política pública
Sebastián Bitar

PNUD LAC PDS Nº. 35
Migración reciente hacia el Perú: situación, respuestas de política y oportunidades
María Cecilia Dedios y Felipe Ruiz

PNUD LAC PDS Nº. 36
Las migraciones en Costa Rica: desarrollo de políticas migratorias recientes para su atención
Laura Solís y Jason Hernández

PNUD LAC PDS Nº. 37
Migración en Trinidad y Tobago: tendencias y políticas actuales
Elizabeth Thomas-Hope

PNUD LAC PDS Nº. 38
Migración en Barbados: ¿Qué sabemos?
Natalie Dietrich Jones

PNUD LAC PDS Nº. 39
Impactos en Panamá del conflicto Rusia-Ucrania
Pablo Sanguinetti

PNUD LAC PDS Nº. 40
Los desafíos de la mitigación del cambio climático en América Latina y el Caribe: algunas propuestas de acción
Mauricio Cárdenas y Sebastián Orozco

PNUD LAC PDS Nº. 41
Análisis del sistema tributario y propuesta de reforma para financiar el sistema de seguridad social: el caso paraguayo
Agustina Carvallo, Carlos Charotti, Carlos Fernández y Felipe González

PNUD LAC PDS Nº. 42
Un sistema de protección social universal en el centro de un nuevo pacto fiscal en América Latina y el Caribe
Resumen por Santiago Rodríguez y Almudena Fernández

PNUD LAC PDS Nº. 43
Sistema tributário Brasileiro: Diagnóstico e alternativas de reformas
Rodrigo Orair

PNUD LAC PDS Nº. 44
El sistema tributario en la República Dominicana
Mariana Viollaz

PNUD LAC PDS Nº. 45
Impuestos en el Ecuador: sistema tributario y opciones para elevar los ingresos permanentes del fisco
José Hidalgo Pallares

PNUD LAC PDS Nº. 46
Tax reform for fiscal sustainability and social development in Jamaica
Manuel Mera y Federico Ortega

PNUD LAC PDS Nº. 47
Análisis del sistema tributario chileno
Ricardo Guerrero, Jorge Atria, Michel Jorratt e Iván Ramírez

PNUD LAC PDS Nº. 48
Avances y obstáculos en el sistema de pensiones en Chile (1980-2023)
Osvaldo Larrañaga

PNUD LAC PDS Nº. 49
Protestas, derechos humanos y prevención de conflictos
Propuestas para repensar los modelos de respuesta estatal a la movilización social
Emanuele Sapienza, Gloria Manzotti y Luqman Patel

PNUD LAC PDS Nº. 50
Mercado laboral en Guatemala: análisis de los últimos 10 años, proyecciones para los próximos 30 años y recomendaciones de políticas de empleo
Luis Henrique da Silva de Paiva, Valentina Calderón Mejía,Elias Miguel Ahuat Valencia y Patricia Carolina Joachin Godinez

UNDP LAC PDS Nº. 51
Mapping climate mobility hotspot risks: An Approach for development organizations to assess risks and responses to climate mobility
Robert Muggah

UNDP LAC PDS Nº. 52
Reviewing climate-related human mobility in Latin American and Caribbean's Nationally Determined Contributions (NDCs) and National Action Plans (NAPs)
Robert Muggah

PNUD LAC PDS Nº. 53
Movilidad climática, adaptación y resiliencia: lecciones de Colombia para América Latina y el Caribe
Robert Muggah

PNUD LAC PDS Nº. 54
El uso de futuros en los parlamentos
Guía para la transformativa

PNUD LAC PDS Nº. 55
Análisis de los cambios recientes de la pobreza por ingresos en Chile

PNUD LAC PDS Nº. 56
Gobernanza democrática, gobernanza efectiva y desigualdad en América Latina

PNUD LAC PDS Nº. 57
Desarrollo humano resiliente para superar el ciclo de desigualdad-desastre-desigualdad

SERIE DE DOCUMENTOS
DE POLÍTICA PÚBLICA

UNDRR
Oficina de Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres

PNUD

www.undp.org/es/latin-america

twitter.com/PNUDLAC
www.facebook.com/pnudlac
www.instagram.com/pnudlac
www.linkedin.com/company/pnudlac
www.youtube.com/PNUDLAC

Agradecemos el apoyo de

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

aecid

Cooperación
Española